



## ¿Unidad con los banqueros y la oligarquía?



# NO, GRACIAS

¡Necesitamos políticas  
de izquierda de verdad!





# Bielorrusia

## Lukashenko contra las cuerdas

¡La lucha de la clase trabajadora con un programa socialista es el único camino!



**Juana Cobo**  
Izquierda Revolucionaria  
Comisión Ejecutiva

El levantamiento social desatado en Bielorrusia el pasado 9 de agosto ha colocado al régimen bonapartista burgués de Alexander Lukashenko contra las cuerdas. El detonante fue el descarado fraude electoral, que dio al actual presidente más del 80% de los votos. Desde entonces, la camarilla dirigente ha desplegado una intensa represión que ha causado varios muertos, torturas indiscriminadas y más de 7.000 detenidos, pero que se ha mostrado impotente para frenar a los centenares de miles de personas que siguen llenando las calles de decenas de ciudades del país.

¿Quién es Lukashenko y qué ofrece la oposición proimperialista?

Los medios occidentales denuncian a Lukashenko como un dictador que recurre a la fuerza para aplastar a su pueblo. Pero las imágenes de Minsk no son muy diferentes a las de numerosas ciudades de EEUU, donde la Guardia Nacional y la policía reprimen a diario a los manifestantes de Black Lives Matter siguiendo las órdenes de Trump.

Debemos tener claro la enorme hipocresía de las potencias capitalistas occidentales, y su interés en ganar una influencia decisiva en Bielorrusia. Pero la denuncia de las maniobras imperialistas no implica que tengamos que defender el régimen despótico de Lukashenko. No dirige ningún Estado obrero deformado, sino un país donde la burguesía bielorrusa nacida de las entrañas de la antigua burocracia estalinista controla las estructuras estatales y se ha enriquecido a manos llenas durante décadas.

Enfrente se colocan los candidatos opositores, acérrimos defensores de la economía de mercado y agentes de las po-

tencias imperialistas, pero que han compartido mesa y mantel con Lukashenko a la hora de saquear y explotar al pueblo. El favorito en todos los sondeos electorales era el banquero Viktor Babariko. Los otros son Valeri Tsepkalo, exembajador en EEUU y defensor de una agenda de privatizaciones radical, y el bloguero liberal Serguéi Tijanovski, propietario de varios clubes nocturnos. Todos fueron encarcelados por Lukashenko y se les impidió presentarse a los comicios. Pero son ellos quienes están detrás de la candidatura encabezada por Svetlana Tikanovskaya.

**Oleada de huelgas.**  
La clase obrera pone su sello en los acontecimientos

El 13 de agosto se produjo un punto de inflexión en las protestas: miles de trabajadores de fábricas de todo el país se pusieron en huelga y participaron en grandes manifestaciones. El movimiento huelguístico comenzó en Minsk, en la principal planta automovilística del país, BelAZ. Sucesivamente se sumaron centenares de empresas tanto del Estado como del sector privado. Esta oleada culminó el 17 de agosto con una huelga total y la producción industrial prácticamente paralizada. La participación masiva de la clase obrera no tiene precedentes desde la separación bielorrusa de la antigua URSS.

Además, sus demandas han ido incorporando reivindicaciones con un sesgo clasista y revolucionario. Un ejemplo es el panfleto del comité de huelga más grande del país exigiendo la creación de sindicatos independientes, prohibir la privatización de las empresas industriales y agrícolas, derogar la reforma de las pensiones, simplificar el proceso de revocación de diputados y funcionarios, y crear consejos de trabajadores y la autogestión obrera en las fábricas.

Estas reivindicaciones chocan frontalmente con el régimen de Lukashenko,

pero también con la oposición burguesa y el imperialismo occidental. Para la Unión Europea el objetivo no es la defensa de la democracia sino los beneficios que pueden conseguir sus bancos y multinacionales con las privatizaciones de las empresas públicas bielorrusas, y el control de un país estratégico frente a la Rusia de Putin.

Lo que está en juego

Lukashenko llegó al poder en 1994, y si se ha mantenido es porque logró que la privatización y la transición al capitalismo se realizara conservando un sector público significativo, en especial la industria pesada, en el que se podía apoyar. Esto se combinó con la creación de zonas económicas libres donde se garantizaba a cientos de empresas extranjeras que no pagarían impuestos y podrían explotar a una mano de obra cualificada a cambio de salarios muy bajos.

La estabilidad económica permitió mantener un notable grado de protección en sanidad y educación, empleo e infraestructuras sociales. Estas son las condiciones que le granjearon un apoyo popular importante, especialmente en las zonas agrarias de gran peso también en la economía bielorrusa.

La tranquilidad terminó en 2011 con la crisis económica: la inflación se descontroló, el paro aumentó significativamente, y las privatizaciones arrojaron igual que los recortes y contrarreformas a cambio de los préstamos del FMI. Así, el régimen bonapartista burgués de Lukashenko ha ido perdiendo apoyo social, alentando las disputas entre los distintos sectores de la clase dominante y del aparato del Estado, y dando alas a los que apuestan por ejecutar planes de privatización salvaje, liquidar la economía estatal y alinearse con el imperialismo occidental para alejarse de la influencia rusa.

El imperialismo ruso no es ningún aliado de la clase obrera bielorrusa

El otro factor que permitió la estabilidad bielorrusa es la extrema dependencia económica de Rusia. Desde 1997 ambos países han formado una unión política y económica, beneficiándose Bielorrusia de la venta de gas y petróleo ruso a precio de coste que después revendía en el mercado internacional, proporcionándole enormes beneficios.

Como sucedió en Ucrania, Bielorrusia es para Moscú un peón más de su lucha con el imperialismo occidental por el control e influencia en la región. No va a tolerar sin más una nueva retirada en un territorio que en realidad sigue considerando parte de Rusia. Putin —que adoptó un perfil bajo en los primeros días de protestas, incluso pidiendo la libertad de los presos políticos aunque reconociendo los resultados electorales— está oscilando cada vez más a apuntalar el régimen de Lukashenko, quien parece decidido a no abandonar el poder fácilmente.

El presidente ruso apoyará financieramente a Bielorrusia y ha creado “una unidad de seguridad de reserva” por “si la situación se descontrola”. La posibilidad de una intervención militar rusa no se puede descartar, pero las consecuencias podría acarrear más dificultades que ventajas a Putin, provocando movilizaciones en su contra dentro de sus propias fronteras.

Por una política de independencia de clase, por el socialismo

En este contexto, la participación masiva y decidida de la clase obrera preocupa a todos los sectores de la clase dominante bielorrusa, pero también al Kremlin, a la UE, a la OTAN y al imperialismo norteamericano.

Es muy significativo que los líderes de la oposición pidieran a los trabajadores “moderación” y regresar al trabajo. Sin embargo, están surgiendo numerosos comités de fábricas y asambleas que impulsan las huelgas desde abajo. Es un momento crucial, hay una oportunidad de liberarse de Lukashenko y su camarilla, pero también de los oligarcas que se han enriquecido saqueando al Estado bielorruso.

La clase obrera está demostrando su fuerza y capacidad de resistencia y ofensiva. Debe dotarse de un programa de independencia de clase que defienda la renacionalización de los sectores privatizados bajo el control de los trabajadores y el fin de la corrupción en las corporaciones estatales. Tiene que rechazar las políticas de austeridad y privatización, anular el aumento de la edad de jubilación, defender la educación y sanidad públicas de calidad, y el restablecimiento de todos los beneficios y prestaciones sociales perdidas con la restauración capitalista.

Juntos a estas reivindicaciones, la vanguardia obrera tiene que oponerse tajantemente a la intervención imperialista de Occidente o de Rusia, luchar por la libertad de organización y manifestación, y de todos los presos políticos. Y lo más importante, crear sus propios organismos de lucha y sindicatos independientes, como parte de un proceso para construir un partido revolucionario que levante la bandera de la transformación socialista de Bielorrusia.

Puedes leer el artículo completo en [izquierdarevolucionaria.net](http://izquierdarevolucionaria.net)



A dos meses de las elecciones presidenciales

# Una intensa lucha de clases sacude Estados Unidos



**Beatriz García**  
Izquierda Revolucionaria  
Asturias

El martes 3 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales en EEUU en un contexto de enorme crisis económica y política, y de máxima polarización social. El levantamiento contra la violencia racista de la policía se sucede sin descanso, mientras las fuerzas represivas del Estado siguen cometiendo nuevos asesinatos apoyadas por bandas armadas de extrema derecha que recorren las calles fusil en mano. EEUU vive un punto de inflexión en su historia, y las consecuencias revolucionarias del mismo se dejarán sentir en todo el mundo.

**Donald Trump alienta la violencia racista con un discurso anticomunista**

El 23 de agosto en la localidad de Kenosha (Wisconsin) la policía disparaba siete tiros por la espalda al afroamericano Jacob Blake delante de sus tres hijos. Este fue el detonante de nuevas y masivas protestas en las calles. A los tres días, en esa misma ciudad, Kyle Rittenhouse, un joven de extrema derecha y declarado seguidor de Trump, utilizaba su fusil con-

tra los manifestantes asesinando a dos personas mientras era protegido por la policía. Pocos días después, en Portland (Oregón), ciudad en la que desde el asesinato en mayo de George Floyd se suceden a diario las protestas, Jay Danielson, miembro del grupo de extrema derecha Patriot Prayer, recibía un disparo mortal de un militante antifascista tras un choque violento en las calles.

La reacción de Trump fue inequívoca. El 1 de septiembre acudió a Kenosha para apoyar la salvaje actuación policial, justificar los asesinatos perpetrados por Kyle Rittenhouse y calificar como “terrorismo doméstico” las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial. En el caso de la muerte del fascista Danielson, exigía por redes sociales la detención del presunto autor, que finalmente fue abatido a tiros por el FBI cuando procedía a su detención.

Esta ofensiva de Trump, a dos meses de las elecciones, pretende polarizar al máximo el escenario con tres objetivos. Primero, ocultar el fracaso de su desafío a China y el declive imparable del imperialismo norteamericano. Segundo, desviar la atención de la catástrofe social y económica que vive el país. Tercero, en el caso de que finalmente salga derrotado por un estrecho margen, justificar un supuesto pucherazo en los comicios.

En esta estrategia es muy significativa su cruzada contra la amenaza del “socialismo”. Trump se ha erigido en guardián de la ley y el orden, de la familia y la tradición. Pretende movilizar, con

un mensaje de combate a un aparato del Estado plagado de racistas y supremacistas blancos, a los sectores de la pequeña burguesía que exigen mano dura para bajar los salarios y aplastar los derechos de los trabajadores —especialmente de los inmigrantes— y también a capas obreros atrasados y desesperados ante la crisis. Con esta política está colocando la lucha de clases a un nivel desconocido desde los años 30 del siglo pasado.

**La lucha antirracista expresa la furia de la clase obrera y la juventud**

El asesinato de George Floyd desató las mayores movilizaciones sociales de la historia norteamericana y derrotaron la represión con la que Trump quiso liquidarlas.

Colocando las contradicciones de clase en primer plano, la lucha en curso ha unificado a los oprimidos por encima de cualquier barrera racial o nacional, y ha sacado a la luz el profundo retroceso en las condiciones de vida de millones de norteamericanos, empezando por la comunidad afroamericana.

Cuando la administración Trump, con el beneplácito de los demócratas, ha dado luz verde a un plan para inyectar 3,6 billones de dólares a la banca y los grandes monopolios, cuando el Dow Jones ha cerrado el segundo trimestre de este año con una subida de 18 puntos, la mayor desde 1987, y cuando por primera vez en la historia las doce personas más ricas de EEUU suman una fortuna más de un billón de dólares... la vida de la gente corriente se hunde.

La primera potencia capitalista del planeta registra cifras desastrosas: El desempleo afecta a cerca de 20 millones de trabajadores, a finales de junio contaba con 48 millones de pobres, y la tasa de pobreza afectaba al 32% de los niños negros, al 26% de los niños latinos y al 11% de los niños blancos. Al mismo tiempo lidera el ranking mundial en la pandemia de la

covid-19, con más de seis millones de contagiados y cerca de 200.000 muertos.

Necesitamos un partido de los trabajadores y la juventud.  
¡El Partido Demócrata es parte del problema, no la solución!

Este abismo social es el combustible que ha inflamado una imparable lucha de clases. El latido revolucionario en el corazón del imperio aupó la candidatura de Bernie Sanders. Con un discurso que apelaba a una “revolución política” contra el 1% de Wall Street, a la creación de un sistema de sanidad pública universal, y las políticas sociales a favor de la mayoría, se convirtió en un referente para millones de oprimidos. Paralelamente, la elección de candidatos independientes o a la izquierda del aparato demócrata también expresaba el proceso de radicalización de millones de jóvenes y trabajadores en EEUU, que ha sembrado el pánico en la burguesía norteamericana e internacional.

La capitulación de Sanders y su apoyo al candidato del aparato demócrata, el multimillonario y vicepresidente de Obama, Joe Biden, supuso un importante jarro de agua fría. Y, sin embargo, una vez más y frente a todos los obstáculos, el movimiento de protesta contra un establishment podrido ha resurgido con una fuerza explosiva.

Las encuestas realizadas en plena crisis covid preveían una holgada victoria para Biden sobre Trump. Sin embargo, los últimos datos aparecidos en prensa y televisión parecen indicar un recorte de esa ventaja, que bajaría de 10 a 6 puntos. El aparato demócrata vuelve a sentir el fantasma de la derrota de Hillary Clinton en 2016.

La razón de esto es obvia: el Partido Demócrata y su candidato, Joe Biden, tienen un solo objetivo: blindar los privilegios de los capitalistas frente a las aspiraciones de las masas.

Los discursos de “apoyo” a las movilizaciones antirracistas de Biden, se mezclan también con declaraciones a favor de la policía, contra el “socialismo” y de respaldo a los grandes consorcios empresariales. Sus intentos de rentabilizar en las urnas el descontento social, apaciguándolo y reconducirlo a las aguas del parlamentarismo, chocan con el instinto de millones de oprimidos.

Por supuesto que existe un deseo masivo de expulsar a Trump de la Casa Blanca, pero convive con una desconfianza más que justificada sobre lo que pueden ofrecer Biden y su equipo. Por eso una derrota de Trump sería, por encima de todo, una importante victoria del movimiento y se daría a pesar de los demócratas. En cualquier caso, el desenlace electoral deja un escenario completamente abierto. La única certeza es que, sea cual sea el resultado, la clase obrera y los oprimidos de EEUU van a ver tener que recurrir a la acción directa y la lucha de clases para enfrentar sus problemas. En un proceso que tiene profundas raíces sociales, y que se ha fortalecido por la experiencia de estos años, la necesidad de construir un partido de los trabajadores y la juventud, con un programa socialista consecuente, se abrirá paso con fuerza.



# Movilizaciones contra Netanyahu y crisis política en Israel



**Miguel Ángel Domingo**  
Izquierda Revolucionaria  
Comisión Ejecutiva

Hace ya más de dos meses que comenzaron las manifestaciones frente a la residencia oficial del primer ministro Netanyahu en Jerusalén. En pocos días se extendieron a todo el país, conformando el movimiento de protesta más extenso y profundo desde el levantamiento social que se produjo en el verano de 2011 al calor de la Primavera Árabe.

Si bien había protestas simbólicas contra Netanyahu desde hacía meses en la plaza de París, se produjo un salto cualitativo el 14 de julio, en una manifestación de miles de personas que fue bautizada como la Noche la Bastilla, por la coincidencia con el aniversario de la Revolución francesa.

Este movimiento social responde a factores muy concretos. Igual que en otros países, tras unas semanas de confinamiento frente a la pandemia, el Gobierno israelí abrió rápidamente la economía, primando los intereses capitalistas frente a la salud pública. El resultado ha sido un fuerte brote que ha colocado a Israel como primer país del mundo en contagios por millón de habitantes.

La reapertura de la economía no ha evitado que en el segundo trimestre el PIB se desplome un histórico 29%, que se ha traducido en un dramático incremento del paro del 4% al 21%. La clase obrera israelí ya vivía al límite antes de la pandemia: las cifras macroeconómicas ocultaban, igual que en otros países, la precarización y la caída del nivel de vida en que se basaba el crecimiento económico.

A esto se añade la propia figura de Netanyahu como cara visible de un régimen cada vez más reaccionario, corrupto y despótico. Todo esto ha dado lugar a una tormenta perfecta que ha acabado estallando. Las consignas “¡dictador, vete a casa!”, “¡vergüenza!” o “¡corruptos a la cárcel!” son un ejemplo de ello.

Como en el resto del mundo, la juventud, que sufre especialmente la precariedad y la falta de futuro está siendo la vanguardia de las protestas. Casi al mismo tiempo que comenzaban las manifestaciones, se producían huelgas entre las enfermeras o los trabajadores sociales (que se saldaron con victorias) y manifestaciones de miles de desempleados en Tel Aviv. La respuesta del Gobierno ha sido la represión policial y el propio Netanyahu ha calificado a los manifestantes de “anarquistas de izquierda” y movilizó a sus partidarios para enfrentarse a las manifestaciones, lo que ha echado más leña al fuego.

## Crisis política y escisión en la clase dominante

Estas movilizaciones son también la otra cara de la profunda crisis política que azota al régimen sionista y las divisiones que recorren a la clase dominante. Sectores decisivos de la burguesía y del aparato del Estado sionista han roto con Netanyahu y están intentando derribarlo desde hace años. Que no lo hayan conseguido no hace sino reflejar la impotencia y el callejón sin salida del régimen.

Este sector de la clase dominante sionista formó apresuradamente la coalición Kahol Laván (Azul y Blanco), encabezada por Benny Gantz, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército, para enfrentarse a Netanyahu tras el desplome del Partido Laborista —otro reflejo de la crisis del régimen—.

Netanyahu se enfrenta a cargos de soborno, fraude y abuso de poder, y podría acabar en la cárcel. Su única salida es alcanzar la mayoría absoluta como sea para tramitar cambios legales que le den inmunidad.

En las tres elecciones parlamentarias celebradas en el último año, Netanyahu y Gantz han obtenido resultados similares pero el segundo ha sido incapaz de articular una mayoría en un parlamento muy fragmentado. In extremis, amagan-

do con unas cuartas elecciones, Netanyahu consiguió formar un Gobierno con Gantz repartiéndose el cargo de primer ministro dos años cada uno.

Este es un Ejecutivo dominado por Netanyahu y ya ha entrado en crisis por la elaboración de los presupuestos. Si el 25 de agosto no se aprobaban se convocarían nuevas elecciones. Ese mismo día se aprobó una prórroga de cien días, un parche legal que simplemente aplaza la crisis. A Netanyahu, unas nuevas elecciones le eximirían de ceder el cargo a Gantz y le permitirían seguir afrontando sus juicios con el blindaje legal que le da el poder.

## Acuerdo con Emiratos

En este contexto se ha producido el acuerdo negociado por Trump por el que Emiratos Árabes Unidos reconoce formalmente la existencia de Israel. Aunque calificado de “histórico” —al ser el tercer país árabe que da este paso tras Egipto y Jordania—, en realidad este acuerdo solo hace pública la estrecha relación de décadas entre Emiratos e Israel en ámbitos como la seguridad, la inteligencia, etc. Este pacto tiene mucho de tabla de salvación para sus protagonistas, que se enfrentan cada uno a importantes problemas de orden interno.

Además de enfrentarse al movimiento en la calle y a las dificultades de su Gobierno, Netanyahu había prometido la anexión de partes de Cisjordania el 1 de julio para garantizarse el apoyo de la extrema derecha en las últimas elecciones.

Pero no contaba con el apoyo de nadie, ni siquiera de Trump, que ahora está tratando de compensarle. A su vez, el presidente estadounidense busca algo que ofrecer en las elecciones de noviembre, después del fracaso de su política exterior y de la desastrosa gestión del coronavirus en EEUU. Por su parte, Bin Zayed —príncipe heredero y gobernante de facto de Emiratos, el verdadero hombre fuerte del Golfo—, no está consiguiendo una victoria en ningún escenario en los que está implicado (Siria, Yemen, Libia o el fiasco que está significando su protegido Bin Salmán en Arabia Saudí).

## Una alternativa revolucionaria

Las manifestaciones exigiendo la salida de Netanyahu, están unificando todos los problemas sociales del país. Incluso sin una dirección consistente, la propia experiencia del movimiento rompe las maniobras, la demagogia y los prejuicios que han estado utilizando Netanyahu y la burguesía sionista durante años para desdibujar la lucha de clases en Israel. La conclusión de que el problema es todo el sistema se abre paso.

La primera tarea para elevar el movimiento a un nivel superior es unificar y extender los distintos movimientos que ya están en marcha: la clase obrera que está empezando a movilizarse con huelgas en la sanidad o la enseñanza; el movimiento que ha estallado contra la “manada de Eilat”, en un escandaloso caso de violación múltiple de una menor; los árabes israelíes que se manifestaron el 6 de junio contra la ocupación de Palestina, bajo la consignas “palestinian lives matter”, etc.

En este contexto, es indudable que un partido revolucionario, que defendiese abiertamente un programa marxista revolucionario e internacionalista conectaría con las aspiraciones de las masas, en primer lugar con la juventud. Como siempre en la historia, es en la lucha colectiva donde los problemas aparentemente irresolubles se pueden abordar desde otra perspectiva, la de la unidad de los oprimidos frente a los opresores.

► [www.izquierdarevolucionaria.net](http://www.izquierdarevolucionaria.net)

**Una violación múltiple a una adolescente incendia las calles de Israel**



**IZQUIERDA REVOLUCIONARIA**

Afiliate a IZQUIERDA REVOLUCIONARIA y construye con nosotros las fuerzas del marxismo internacional

ANDALUCÍA: Cádiz 682 276 436 · Córdoba 619 033 460 · Granada 616 893 592 · Huelva 695 618 094 · Málaga 611 477 757 · Sevilla 600 700 593 · ARAGÓN: Zaragoza 640 702 406 · ASTURIAS: 686 680 720 · CASTILLA-LA MANCHA: Guadalajara 949 201 025 · Puertollano 650 837 265 · Toledo 699 956 847 · CASTILLA Y LEÓN: Salamanca 653 699 755 · CATALUNYA: Barcelona 933 248 325 · Tarragona 660 721 075 · EUSKAL HERRIA: Araba 625 707 798 · Bizkaia 664 251 844 · Gipuzkoa 685 708 281 · Nafarroa 635 919 738 · EXTREMADURA: 638 771 083 · GALIZA: A Coruña 678 420 888 · Compostela 637 809 184 · Ferrol 626 746 950 · Ourense 604 024 366 · Vigo 679 500 266 · MADRID: 914 280 397 · PAÍS VALENCIÀ: 685 098 482

[www.izquierdarevolucionaria.net](http://www.izquierdarevolucionaria.net) • [contacto@izquierdarevolucionaria.net](mailto:contacto@izquierdarevolucionaria.net) • [f](https://www.facebook.com/izquierdarevolucionaria) [i](https://www.instagram.com/izquierdarevolucionaria) [t](https://www.tiktok.com/@izquierdarevolucionaria) @IzquierdaRevol



Declaración de Izquierda  
Revolucionaria  
Internacional

# Revolución en Líbano

Por la federación socialista de Oriente Medio

El 10 de agosto dimitió el Gobierno libanés en pleno. La brutal explosión del puerto de Beirut hizo emerger de nuevo la podredumbre del régimen capitalista sectario y la determinación de las masas por derrocarlo. También ha supuesto un punto de inflexión en la historia libanesa y en el proceso revolucionario que comenzó en octubre de 2019.

La explosión abrió un cráter de 140 metros de ancho y 43 de profundidad y dejó cerca de 200 muertos, más de 7.000 heridos y 350.000 personas perdieron sus hogares. Nueve hospitales resultaron dañados, quedando cuatro de ellos inutilizados.

Líbano ya se enfrentaba a una situación límite. La peor crisis económica de su historia ha colocado a la mitad de la población bajo el umbral de la pobreza, hay un *corralito* bancario, la moneda ha perdido más del 80% de su valor y el 22 de julio se convirtió en el primer país de Oriente Medio en alcanzar la hiperinflación. Por si esto no era suficiente, la primera semana de agosto se estaba registrando el pico más alto de contagios de covid-19.

## El Estado sectario, único responsable

En ningún caso se puede hablar de un accidente. El nitrato de amonio llevaba almacenado en el puerto en condiciones precarias desde 2013. A pesar de repetidas advertencias sobre su peligrosidad, nunca se tomó ninguna medida de seguridad ni para destruirlo, quizá esperando una ocasión para venderlo y obtener un buen beneficio.

No se puede explicar este horror sin entender la naturaleza del corrupto Estado libanés. Las familias que controlan el país, a través de los diferentes partidos sectarios, son básicamente las mismas desde su independencia de Francia en 1943 y las que encabezaron las facciones de la guerra civil entre 1975 y 1990.

El imperialismo francés, antes de irse, estableció un sistema sectario exprimiendo la política de “divide y vencerás”. Después, la guerra civil convirtió el país en el campo de batalla de Oriente Medio, donde se enfrentaban potencias imperialistas y regionales. Los caudillos cristianos y musulmanes se adaptaron a esa situación y conservaron sus posiciones cuando la guerra terminó. Los trajes y corbatas sustituyeron a los uniformes militares. El sistema político sectario se mantuvo con cambios mínimos.

La oligarquía abandonó cualquier actividad económica productiva y se dedicó al turismo, a la especulación inmobiliaria y a parasitar los recursos del Estado y de un sistema bancario convertido en una gigantesca estafa piramidal. Treinta años después, el Estado es incapaz de proporcionar servicios sociales, infraestructuras dignas o una política de salud pública frente a la pandemia.

Cada viejo caudillo sectario y sus familiares que copan los puestos más altos del poder, cada lacayo que han colocado en posiciones influyentes en el sector público o en el privado, cada ministro y cada burócrata..., esta mafia es responsable colectiva de lo ocurrido el 4 de agosto.

## Del ‘shock’ inicial a la ira revolucionaria

La explosión planteó de inmediato gigantesca tarea: búsqueda de supervivientes, limpieza de las calles, atención a los heridos en medio del colapso del sistema sanitario... El Estado corrupto se limitó a decretar el estado de emergencia, para evitar protestas, y desapareció de las calles.

La población de los barrios afectados, en primer lugar los jóvenes que han sido la punta de lanza del movimiento revolucionario, tomó sobre sus hombros todo este trabajo. Enseguida llegaron voluntarios de todos los barrios y de otras ciudades, en una nueva muestra de la fuerza imparable de la juventud y la clase obrera cuando se ponen en marcha.

En cuestión de horas, el shock se transformó en indignación. Las consecuencias de la explosión y el abandono

posterior del Estado se convertían en una obscena imagen gráfica de lo que podía ofrecer el régimen.

El sábado 8 se convocó una gran movilización en Beirut, bautizada como “el día del juicio” para exigir la renuncia del Ejecutivo. El carácter de esa manifestación superaba en radicalización a las celebradas desde octubre del año pasado, y se concretaba en el hashtag “preparad las sogas”. Una manifestación masiva llenó el centro de la capital, mientras se desplegaban, ahora sí, cientos de soldados para reforzar a la policía. Se ocuparon varios ministerios y la sede de la patronal bancaria. La represión convirtió la jornada en la más violenta desde el año pasado: más de 700 heridos y un policía muerto al caer por una ventana.

Esa misma tarde, el presidente Hassan Diab llamaba a celebrar elecciones anticipadas, pero el golpe asestado al régimen por la manifestación del sábado había sido muy duro y el lunes 10 anunció la dimisión de todo el Gobierno.

## La formación del nuevo Gobierno

Desde entonces, todo tipo de maniobras se han sucedido. El presidente francés Macron ha sido el más activo. Ya visitó Beirut 48 horas después de la explosión, prometiendo demagógicamente ayudar al “pueblo y no a los políticos”. La antigua metrópoli colonial intenta adelantarse a actores regionales con renovados intereses en Líbano, como Arabia Saudí, Irán y Turquía, y ha sido quien más ha presionado por la rápida designación de un nuevo primer ministro que sea respaldado por todos los partidos sectarios.

Mustafá Adib, embajador en Alemania, ha sido el elegido. Tiene un perfil similar al del dimitido Diab: sin ser una cara pública de ningún partido es parte del *establishment* sectario, y ha sido recibido por la población como “más de lo mismo”. Macron habla de “establecer un nuevo régimen” en Líbano, como si el imperialismo francés no tuviera nada que ver en la pesadilla actual.

## La revolución socialista, el único camino

Desde el pasado octubre, la clase obrera y la juventud libanesa han respondido

con contundencia a los debates recurrentes sobre “la falta de conciencia revolucionaria”. En apenas unas semanas paralizaron el país con huelgas, manifestaciones y cortes de carretera, derribando el gobierno de Saad Hariri, sostenido por todos los sectores de la oligarquía.

Si bien la clase obrera ha jugado un papel central, el movimiento muestra debilidades que es necesario superar. El hecho de que ninguna organización sectaria haya dirigido las movilizaciones ha dificultado su control por el Estado. Pero eso no se contradice con que es imprescindible una dirección revolucionaria. Cuanto más tarde en levantarse más margen de maniobra tendrán los adversarios de la revolución para descarrilarla, como demuestra la experiencia de la primera oleada de la Primavera Árabe.

Un partido revolucionario, marxista, debe ofrecer una estrategia clara y consecuente hacia el derrocamiento del capitalismo y el establecimiento del poder obrero, basándose en los sectores y los métodos más avanzados del movimiento. En primer lugar, el establecimiento de comités revolucionarios, sobre la base de los organismos y asambleas que ya existen. En segundo lugar, el programa de acción debería concretarse en:

- Extensión del movimiento al resto del país.
- Ninguna confianza en los partidos sectarios y sus patrocinadores imperialistas. Solo el pueblo salva al pueblo.
- Llamamiento a los soldados a desobedecer las órdenes de reprimir y a formar comités, a la vez que organizar la auto-defensa del movimiento.
- Convocatoria de una huelga general revolucionaria hasta derrocar a la oligarquía.
- Expropiación de la banca, de las fortunas de la mafia sectaria y de las palancas fundamentales de la economía bajo el control democrático de la población.
- Llamamiento internacionalista a los trabajadores y jóvenes de Oriente Medio y del mundo.

Solo hay un camino para resolver el caos que se cierne sobre el Líbano: la revolución socialista y la toma del poder por parte de la clase obrera al frente de las masas oprimidas y la extensión de la revolución al conjunto de la zona alcanzando la bandera de la Federación Socialista de Oriente Medio.

Puedes leer el artículo completo en [izquierdarevolucionaria.net](http://izquierdarevolucionaria.net)



# Una oleada de huelgas obreras recorre Irán



**Carlos Rodríguez**  
Izquierda Revolucionaria  
Guadalajara

El régimen reaccionario de los mulás está siendo sacudido por la oleada de huelgas más importante de los últimos 40 años. La irrupción de los trabajadores del sector petroquímico, los batallones pesados de la clase obrera iraní, ha elevado el tono de la lucha de clases durante el verano. A lo largo del mes de agosto, las huelgas y protestas se extendieron a otros sectores como el de los trabajadores del ferrocarril en las ciudades de Jorasán, Arak, Teherán, Karaj y de las minas de carbón en Kerman.

## La muerte de un obrero por un golpe de calor, el detonante

El detonante fue la muerte el 28 de julio de Ebrahim Arabzadeh, un trabajador subcontratado del complejo petroquímico Mahshahr, a consecuencia de un golpe de calor tras soportar temperaturas de hasta 50 grados durante la jornada laboral. Estas son las condiciones habituales a las que están sometidos sin que se adopte ningún tipo de medida de refrigeración.

Esta muerte fue la gota que colmó el vaso de la indignación. La huelga se extendió como un reguero de pólvora a 55 empresas del sector petroquímico, refinerías y yacimientos de gas, incidiendo sobre todo en el sur —donde están localizados parte de los yacimientos más importantes— y abarcando a 18 ciudades y a más de un tercio de las 31 provincias del país.

La huelga ha afectado a uno de los yacimientos de gas más importantes: el de South Pars, donde se concentran 10.000 trabajadores. El régimen iraní tiene grandes esperanzas en este complejo de hidrocarburos ya que su explotación se puede convertir en una fuente importante

para la entrada de divisas. Algo vital en un momento de fuerte crisis económica, recrudescida por los efectos de las sanciones del imperialismo estadounidense y que han llevado a una caída del 80% de la producción petrolera.

Sin embargo, pese a ser un punto estratégico para la economía del país, los obreros de South Pars comparten la misma miserable y penosa situación que el resto. Además de las infernales temperaturas que aguantan, realizan turnos de veinte días consecutivos y descansan diez. A partir del 4 de agosto se plantaron y decidieron que no iban a trabajar durante un turno completo de 20 días.

Esta lucha está unificando las demandas obreras de los distintos sectores contra la carestía de la vida y por la mejora de las condiciones laborales. Unas condiciones que son aún peores en las llamadas zonas económicas especiales o zonas francas, donde los empresarios están exentos de cumplir la ya de por sí magra legislación laboral.

Entre las reivindicaciones más destacadas están el pago de los salarios atrasados, un fenómeno generalizado; el pago de seguro médico y cobertura de jubilación, de la que muchos carecen; el fin de

la precariedad, ya que cerca del 70% de los trabajadores de la industria petrolera son subcontratados; y acabar con las privatizaciones. También la lucha por los derechos democráticos más elementales está presente, ya que en Irán están prohibidos los sindicatos independientes y los oficiales no son más que un apéndice de la maquinaria represiva estatal.

## La represión no frena las protestas

El régimen siempre ha recurrido a una feroz represión para frenar a los trabajadores. Pero en esta ocasión ni los latigazos, ni los despidos, ni tampoco las ejecuciones han conseguido su objetivo. Es más, durante el mes de julio ocho trabajadores vieron confirmada su condena a pena de muerte por el delito de manifestarse, y se convocaron manifestaciones contra el intento de ejecutar a varios dirigentes obreros detenidos por organizar huelgas durante las movilizaciones de 2018. Uno de ellos forma parte de la principal empresa azucarera del país, Haft Tappeh, cuyos 4.000 obreros se han distinguido por su combatividad en los últimos años.



Así, la lucha contra la represión se unió a la de estos trabajadores del azúcar, que el 14 de julio iniciaron una huelga que ha resistido más de 50 días, exigiendo los salarios adeudados y el pago completo del seguro de salud, además de la liberación de los detenidos, la readmisión de los despedidos en anteriores huelgas y la prisión para el actual propietario.

Todo esto fue el precedente inmediato que estimuló el movimiento huelguístico de los trabajadores petroleros. La represión, lejos de atemorizar a los trabajadores, los está enfureciendo; es un claro reflejo de que el criminal régimen de los mulás se debilita.

## La debilidad del régimen al desnudo

El capitalismo en todo Oriente Medio, y particularmente en Irán, se encuentra en una situación desesperada, a lo que se suman los efectos devastadores del coronavirus. Pese a que las cifras oficiales hablan de 23.000 muertos y 395.000 contagios, los datos reales son mucho mayores. Hechos como que 5.000 localidades en las que habitan más de un millón de personas no tengan agua corriente nos dan una idea del caos existente.

La ruptura del acuerdo nuclear a finales de 2018 por EEUU y las sanciones que la acompañaron recrudescieron la crisis económica: el PIB ha caído desde entonces un 13,1%. La situación económica es tan grave que —en marzo, y por primera vez en 60 años— el Gobierno iraní se vio obligado a pedir un préstamo de 5.000 millones de dólares al FMI, bloqueado por Estados Unidos.

Se estima que de los 82 millones de habitantes del país, cerca de 57 millones viven bajo el umbral de pobreza, a lo que hay que añadir los más de cuatro millones de despedidos que dejará la pandemia. La inflación está en un 40%, siendo junto a los impagos de salario por los empresarios el acicate de las huelgas obreras.

El descontento contra el régimen es masivo, como ya se vio en las movilizaciones de 2017 y durante el levantamiento social de noviembre de 2019. El asesinato del general iraní Soleimani por parte de Estados Unidos, en enero de 2020, en los primeros momentos supuso un balón de oxígeno para los mulás. Pudieron apelar una vez más a la demagogia del “enemigo exterior”, apoyándose en el sano sentimiento antiimperialista de las masas, y usarlo para cerrar filas en torno a su reaccionario régimen burgués.

Sin embargo, como se ha dejado sentir en la reciente oleada de huelgas obreras, eso fue un espejismo. El descontento y la ira avanzan firmes, y la base social del régimen está cada vez más erosionada. Pese a que en las elecciones legislativa de febrero los conservadores ganaron la mayoría frente al bloque reformista, esto se produjo con una tremenda abstención, el 60%, llegando al 75% en algunas provincias. Es una muestra del enorme descrédito de todas las alas del régimen ante las masas. No solo entre los trabajadores, sino también entre sectores más amplios de las capas medias que en otros momentos depositaron su confianza en el sector reformista liberal.

Irán se halla en una situación explosiva. Las próximas semanas mostrarán qué desarrollo toma el movimiento huelguístico. Sea como fuere, es evidente que la clase trabajadora iraní está estirando sus músculos, mostrando una pequeña parte de su potencial revolucionario.



Entrevista a

# Coral Latorre,

secretaria general del Sindicato de Estudiantes

VIENE DE LA CONTRAPORTADA

Exigimos que todas y todos tengamos acceso a una educación presencial digna y segura y para ello deben reducir la ratio a 15 alumnos por aula, la contratación de 165.000 profesores en todo el Estado, de miles de sanitarios, profesionales de la psicología, trabajadores de la limpieza y comedores..., incorporándolos a las plantillas públicas con todos los derechos laborales, el fin de la brecha digital mediante un reparto masivo de dispositivos digitales y cursos de formación digital gratuitos para

profesorado, familias y estudiantes. Y por supuesto, permisos retribuidos para los padres y las madres para garantizar la conciliación familiar.

Estas son las demandas de quienes conocemos de primera mano la realidad que viven los centros educativos públicos. ¿La respuesta del Ministerio? El silencio y la presentación de un protocolo sanitario donde se plantea que la solución pasa por lavarse las manos cinco veces al día, abrir las ventanas o ir en bicicleta al instituto. Estas "recomendaciones" aprobadas nos parecen un insulto a nuestra inteligencia, una broma de mal gusto y demuestran que Isabel Celaá no puede permanecer ni un día más al frente del Ministerio de Educación. Que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, Cs y Vox se sientan tan cómodas con este plan mientras la comunidad educativa se siente totalmente abandonada debería hacer reflexionar al Gobierno.

Un Gobierno que despertó muchas esperanzas entre la comunidad educativa y las está defraudando justo cuando más necesitamos una política de izquierdas. Al PSOE ya le hemos visto muchas veces actuar, pero lo sorprendente es que la política educativa cuente con el apoyo de ministros y ministras de Unidas Podemos. Ahora tienen una oportunidad de oro para apoyar a los estudiantes y forzar a Celaá y Pedro Sánchez a dar un giro de 180 grados.

Sabemos que la lucha sigue siendo el único camino si queremos que nuestra voz sea escuchada, y así lo haremos en todas las jornadas de huelga de profesores y de estudiantes, en las movilizaciones que organizaremos del 17 de septiembre y en todas las protestas que están convocadas. Esto es solo un anuncio de todo lo que está por llegar.



# ¡Justicia para Paz!

## ¡Basta de violencia machista y justicia patriarcal!

El 14 de septiembre comienza en la Audiencia Provincial de Gijón el juicio de 5 días por el asesinato de Paz Fernández en febrero de 2018. Su asesino, con quien tenía una relación sentimental, arrojó su cuerpo desde un puente después de golpearla con ensañamiento repetidamente hasta matarla, tal como determinó la autopsia. Sin embargo, el abogado pide la libre absolución, planteando que se trató de una muerte accidental al calor de una fuerte discusión.

La fiscalía se niega a calificar lo ocurrido como un asesinato machista y pide que se le juzgue por un delito inferior, el de homicidio —con una pena máxima de 15 años de cárcel— pese a reconocer los agravantes de abuso de superioridad y desprecio de género. No se trata de un caso aislado. Este posicionamiento infame de la fiscalía sigue la estela de los golpes que el aparato judicial patriarcal y reaccionario heredado del franquismo ha tratado de infligirnos a quienes luchamos por una vida digna libre de violencia machista.

Se culpabiliza y persigue a las víctimas, condenándolas al desamparo y el escarnio público mientras los culpables son protegidos por la justicia. Mientras Paz ya no podía defenderse, su asesino ha dado ruedas de prensa, ha destruido pruebas, ha intentado que su cuerpo no se encontrase y se ha reído del dolor de su familia y amigos.

Ahora cuenta con un abogado defensor especialista en violencia de género facilitado por el Estado. El machismo que transpira por todos los

poros este sistema capitalista criminal, desde la judicatura y el aparato del Estado hasta los medios de comunicación amparando a un asesino en medio del silencio forzoso de su víctima, es vergonzoso y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para luchar contra ello.

No vamos a dejar que se olvide la voz de Paz y de todas las víctimas de la lacra de la violencia machista. Más de veinte colectivos feministas, sindicatos y organizaciones de la izquierda así como colectivos en lucha hemos presentado públicamente el Manifiesto contra la violencia machista y la justicia patriarcal, exigiendo justicia para Paz, y anunciado las movilizaciones convocadas por Libres y Combativas, y a las que ya se han sumado decenas de organizaciones.



Lee y difunde el periódico de Libres y Combativas, en castellano, català, euskera y galego  
[www.libresycombativas.net](http://www.libresycombativas.net)



¡Hay que convocar ya una huelga general del profesorado en todo el Estado!  
 ¡Nos jugamos mucho!



## ¡Basta ya de represión en Alimerka!

### Por la nulidad del despido de Taida Trujillo



Puedes firmar aquí la resolución

► [www.sindicalistasdeizquierda.net](http://www.sindicalistasdeizquierda.net)



Concentración el miércoles 16 de septiembre a las 10h frente a los Juzgados de Gijón

# El Gobierno PSOE-UP y la crisis de la monarquía

## Apuntalar el régimen del 78 o luchar por la república socialista



### Declaración de Izquierda Revolucionaria

La huida de Juan Carlos I anunciada el 3 de agosto, y negociada en secreto durante semanas por la Casa Real y el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha convertido en un escándalo de trascendencia histórica. Como parte esencial de la operación de salvamento de Felipe VI diseñada por el PSOE y los poderes fácticos, no deja de llamar la atención por su desprecio hacia cualquier consideración democrática elemental. Un rey impuesto por el dictador Franco, podrido hasta la médula y que ha acumulado una de las mayores fortunas del mundo actuando como lobbista y comisionista de las grandes empresas y corporaciones españolas, se escabulle hacia un retiro dorado entre las muestras bochornosas de gratitud ofrecidas por los partidos del régimen del 78.

La crisis de la monarquía borbónica no es más que el reflejo de la crisis general del capitalismo español y mundial, y de la enorme polarización política que no deja de agudizarse en el contexto de una debacle económica y social sin precedentes.

Los genios que han hecho posible este movimiento buscan un balón de oxígeno para el reinado de Felipe VI, y restaurar la maltrecha legitimidad de una monarquía que, como el resto de las instituciones del Estado, ha perdido la mayor parte de su crédito ante una población harta de soportar sacrificios, desempleo, precariedad y miseria mientras sus gobernantes exhiben una moral corrupta a prueba de bomba.

Lo que parece que no han calculado bien es que la forma y el contenido de esta maniobra se volverá en su contrario: provocará aún más distancia, y más furia, contra un sistema que solo sirve para defender los privilegios obscenos de la élite dominante.

Los dirigentes del PP, Cs y Vox han vuelto a demostrar lo que se espera de ellos. Se va uno de los suyos, que tantos servicios ha prestado a la oligarquía y a la consolidación de los negocios fabulosos que han regado de millones a las familias más insignes de la democracia española, que a su vez eran las más ricas bajo la dictadura franquista.

Las mismas organizaciones y dirigentes que añoran el franquismo, que se han negado a condenar sus crímenes, no ven el menor problema en despedir con todos los honores a este ladrón. ¿Acaso no están sus filas colmadas de personajes de la misma calaña?

¿Acaso los consejeros de administración de la banca o de las grandes corporaciones no practican, cuando llevan a cabo sus negocios, los mismos hábitos y costumbres que Juan Carlos I? La derecha y el capital son coherentes y llevan hasta sus últimas consecuencias su programa.

La cuestión es que esta fuga ha sido diseñada por el presidente del Gobierno de coalición, Pedro Sánchez, y sus colaboradores más cercanos durante semanas. Juan Carlos I además de huir con el botín a buen recaudo, mantiene su título de rey emérito, sigue formando parte de la Casa Real, está aforado ante los tribunales y su seguridad la paga el erario público.

### La monarquía como clave de bóveda

Ante este bombazo político, y las aparentes contradicciones en el seno del Gobierno con declaraciones de Pablo Iglesias hablando de fuga y acción indigna por parte de Juan Carlos I o de Irene Montero afirmando que los ministros de Podemos no “habían sido informados”, Sánchez compareció en rueda de prensa el 5 de agosto.

Es difícil encontrar una defensa más rotunda y encendida de la monarquía y del régimen del 78: “El Gobierno que yo presido considera plenamente vigente el pacto constitucional (...) en este momento necesitamos estabilidad e instituciones robustas, comprometidas con la ejemplaridad, la transparencia y la regeneración; la línea marcada

por la Casa Real en estas últimas horas es la adecuada”.

El presidente, en un momento crítico, ha dejado más que claro que el papel del PSOE en estos últimos cuarenta años como garantía política para la burguesía no es un accidente, y advierte a sus socios que esta hoja de ruta es inamovible. Aunque Sánchez no lo ha hecho explícitamente, el resto de los dirigentes del PSOE no han tardado en glosar la figura de Juan Carlos I. “El rey que consolidó la democracia”, “cuyo papel en el Golpe de Estado del 23F fue clave para evitar una nueva dictadura”, y un sinfín de perlas que siguen el guion oficial de la llamada Transición. Encubriendo con violines y lisonjas el papel de Juan Carlos I, también se oculta la nefasta política de la dirección del PSOE para encumbrar a la monarquía.

La Transición se ha convertido en un relato de mentiras históricas al servicio de la clase dominante y de aquellos políticos de la izquierda reformista que, con sus renunciaciones y capitulaciones, asfaltaron el camino para la derrota. Es imposible separar los negocios de Juan Carlos I del papel que se le asignó en los Pactos de la Transición y que se formalizó en la Constitución de 1978.

El pacto fue alentado por la banca y las grandes empresas, y respaldado por el imperialismo norteamericano que lo vio como la mejor opción para descarrilar el proceso revolucionario que atravesaba el Estado español, paralelo al

desatado en Portugal tras la revolución de los claveles de 1974. Así fue como los políticos franquistas que habían hecho toda su carrera blandiendo el mazo represivo, apoyando sin rechistar cada fusilamiento, tortura, encarcelamiento y exilio, se convirtieron de la noche a la mañana en “demócratas”. Algo que jamás hubiera sido posible sin el respaldo de los dirigentes del PCE y del PSOE que, poniendo en juego toda su autoridad moral y política, dieron una nueva legitimidad a esa casta de reaccionarios y permitieron que un joven Borbón — designado rey por Franco— pasara de ser Juan Carlos *el Breve* al monarca de todos los españoles.

Es mil veces falso que los derechos y libertades democráticas las trajeran Juan Carlos I o Adolfo Suárez. Esta burda mentira, que ha adquirido el sello de verdad histórica, no solo ha sido alentada por la opinión pública burguesa, también los dirigentes de la izquierda reformista la alimentaron sin recato. Fueron la clase trabajadora y la juventud quienes impusieron por la vía de las huelgas, las movilizaciones y manifestaciones de masas, mediante las ocupaciones de fábricas, las libertades democráticas que hoy podemos disfrutar parcialmente, pues muchas de ellas fueron mutiladas posteriormente bajo los sucesivos Gobiernos del PSOE y del PP.

El factor decisivo para derrotar aquel movimiento formidable no fue la represión, sino la política de colaboración de clases de los dirigentes del PCE y del PSOE, la misma que hoy se defiende desde el Gobierno de coalición. Con el falso argumento de que “Franco había muerto en la cama” —un insulto a la memoria de los cientos de miles de



luchadores antifranquistas— y ayudados por la retórica cobarde de “una correlación de fuerzas desfavorable” y un posible “golpe de Estado”, los dirigentes del PCE, del PSOE y de los sindicatos cedieron en todas las posiciones, y renunciaron al socialismo cuando más posible era conquistarlo. El resultado de aquellos polvos son los actuales lodos.

La Constitución de 1978 enmarcó todas las capitulaciones de la izquierda y les dio la forma de “democracia parlamentaria”. La clase dominante impulsó que la Constitución reservase para Juan Carlos I enormes poderes excepcionales que no estaban sometidos a ningún control. Unos poderes que no son inocuos, y que podían activarse para ser utilizados en periodos de crisis social y política.

### La posición de Unidas Podemos

La justificación del Gobierno de coalición por parte de Pablo Iglesias fue que empujarían al PSOE hacia la izquierda. Sin embargo, es el PSOE el que ha arrastrado hacia la derecha a Unidas Podemos. Los hechos son tozudos.

Lo sucedido con Juan Carlos I es otra prueba relevante. Y las declaraciones de los dirigentes de Podemos demuestran que se conforman con la discrepancia retórica pero sin mover un dedo para impulsar la movilización contra la monarquía y a favor de la república.

El 3 de agosto Iglesias no tardó en tuitear que “la propia dignidad de la Jefatura del Estado implicaría que Juan Carlos diera la cara en su país y ante su pueblo”. Entendemos que considera un escándalo y un fraude su huida. Pero el vicepresidente del Gobierno no plantea ninguna acción concreta para impedir que este tocomucho se consume. Presenta sus opiniones respecto a la monarquía como un ejercicio de “normalidad democrática”, para limitarse a decir que sus discrepancias con Pedro Sánchez las resolverá de manera discreta y en privado. En otras palabras, no hará nada más respecto a este asunto.

Lo peor de todo, no obstante, son sus declaraciones en vídeo sobre la necesidad de abrir un debate sobre la monarquía y la república, y la manera en que señala a los jóvenes como los responsables de impulsar el movimiento a favor de la república. ¿No se ha enterado del movimiento masivo que ha sacudido Catalunya desde octubre de 2017 a favor de la república, por el derecho a decidir y donde los jóvenes han jugado un papel de primer orden? En lugar de apoyar esta movilización ejemplar para llenarla de un contenido de clase y socialista, ha renunciado a participar en ella, cuando no ha intentado desacreditarla calificándola de un montaje de las élites, como también ha hecho Alberto Garzón.

Iglesias ha olvidado pronto que Juan Carlos I abdicó el 18 de junio de 2014. Y no lo hizo por voluntad propia, sino presionado por el movimiento de



masas desatado a partir del 15M de 2011, de las grandes Mareas que sacaron a millones a las calles en defensa de la sanidad y la educación públicas, de las marchas de la dignidad, y del rechazo que provocó la actuación de un monarca que nos daba discursos acerca de la ejemplaridad pública, mientras cazaba elefantes y su yerno era pillado infraganti por lucrarse siguiendo sus consejos de experimentado comisionista.

La cuestión no es la actitud de la juventud, sino qué va a hacer Pablo Iglesias para romper con la lógica del régimen del 78.

Iglesias apela a que la actual correlación de fuerzas en el arco parlamentario no da para impulsar un referéndum sobre la república. ¿Acabáramos! ¿De qué nos intenta convencer? ¿De que el PSOE y la derecha se oponen a este referéndum? Obvio. Lo que tiene que decir es qué medidas va a tomar UP para impulsar la movilización con el objetivo de levantar tal presión social que el referéndum se imponga por la vía de los hechos.

¿Acaso se olvida de que la proclamación de la Segunda República fue el resultado de la acción revolucionaria de la población, que con sus huelgas y movilizaciones masivas a lo largo de 1930 y 1931 echaron abajo la dictadura de Primo de Rivera y pusieron a Alfonso XIII rumbo al exilio? Es increíble cómo se puede cambiar tanto de postura cuando en lugar de mirar los hechos a través del prisma de la lucha de clases, se observan con las anteojeras del sillón parlamentario.

La correlación de fuerzas solo se puede modificar en el curso de la lucha, empujando de manera enérgica la confrontación con los grandes poderes establecidos. ¿No fue la lucha de masas y el desafío al orden establecido lo que permitió el surgimiento de Podemos?

Por la vía de las renunciaciones, de la retirada programática, del abandono de la calle, solo se fortalece a los que marcan el paso a la derecha dentro del Gobierno. Cuando llegue el momento, el PSOE prescindirá de los servicios prestados por Podemos con una patada en la boca. Los guiños constantes a Cs y la estrategia de pactar con el PP en asuntos de Estado no son detalles tácticos, sino toda una declaración de principios para un periodo político convulso.

### Levantar un movimiento de masas por la república socialista

“Quienes aprovechan la caída en desgracia de Juan Carlos I para reabrir el debate sobre la Monarquía deben plantearse si, más allá de que sea legítima la reivindicación republicana, esta tiene ahora consensos sociales y parlamentarios suficientes para traducirse en una reforma constitucional. Los datos indican lo contrario. Resulta por tanto irresponsable alimentar la crisis institucional en un momento en que el país necesita estabilidad, uniendo todas sus fuerzas para afrontar una crisis económica devastadora que ya ha llegado y una sanitaria que no se acaba de marchar”. Así finaliza el editorial de *El País* del pasado 4 de agosto.

Es evidente que la clase dominante ve con mucho temor la lucha por la república. Y es así porque la experiencia histórica le enseña que los movimientos de masas a favor de la república terminan por convertirse en movimientos revolucionarios. Por supuesto que si mañana se vieran en la necesidad de soltar lastre y desembarazarse de Felipe VI para mantener en pie el edificio capitalista, muchos de sus prohombres se convertirían en “republicanos de corazón”. Eso fue lo que paso en 1931 con Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura. Pero la burguesía no quiere jugar con fuego y huye de esa disyuntiva como de la peste. Prefiere apuntalar el régimen actual basándose además en el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

Desde Izquierda Revolucionaria consideramos que estamos ante una oportunidad histórica. Es el momento de ejercer el derecho a decidir y no blanquear a un rey como Felipe VI que, además de continuar asegurando los intereses de la oligarquía, ha demostrado su compromiso con la represión y el autoritarismo alentando la ofensiva brutal contra el pueblo de Catalunya. Hay que exigir la inmediata convocatoria de un referéndum democrático donde el pueblo pueda expresarse y votar si quiere seguir sometido a esta institución reaccionaria o prefiere una república.

La izquierda real, militante y combativa, que con su lucha ha desnudado el auténtico carácter de clase de la monarquía borbónica, debe continuar la batalla contra estas maniobras desesperadas que buscan la supervivencia de la monarquía y el régimen podrido del 78. Hay que levantar un gran movimiento de masas a favor de una república de los trabajadores y la juventud que rompa con la austeridad y los recortes, y que defienda abiertamente la transformación de la sociedad. Una república socialista es la alternativa frente a la hecatombe social y económica que padecemos. Una república socialista que reate el nudo de la historia y ponga en práctica el legado de los trabajadores y campesinos que se batieron heroicamente contra el fascismo y protagonizaron una revolución que estremeció el mundo.

Puedes leer el artículo completo en [izquierdarevolucionaria.net](http://izquierdarevolucionaria.net)



► [www.izquierdarevolucionaria.net](http://www.izquierdarevolucionaria.net)

## El régimen del 78 cierra filas con el franquista Martín Villa





## ¿Unidad con los banqueros y la oligarquía?

# No, gracias

Con el lema *España puede*, Pedro Sánchez inauguraba el curso político con un gran acto rodeado de lo más granado de la burguesía española. Bajo la atenta mirada de Ana Patricia Botín (Santander), José María Álvarez Pallete (Telefónica), Carlos Torres (BBVA), Florentino Pérez (ACS), José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) o Pablo Isla (Inditex), el presidente volvió a defender la “unidad nacional” para salir de la crisis, arrancando el aplauso y las alabanzas de todos estos oligarcas. Sánchez se congratuló de la presencia de CCOO y UGT, así como de la de los ministros y ministras de Unidas Podemos, encabezados por el vicepresidente segundo Pablo Iglesias.

Los grandes capitalistas no pueden ocultar su satisfacción por el rumbo que Pedro Sánchez ha tomado. Aunque obviamente no era su opción preferida —ellos habían apostado fuerte por un Ejecutivo del PSOE-Cs sostenido desde fuera por el PP—, una vez que se conformó el Gobierno de coalición dejaron de lado cualquier prejuicio y presionaron para imponer su agenda en todas las cuestiones de fondo.

Saben que los dirigentes del PSOE tienen una aptitud más que probada en la gestión del capitalismo, especialmente en los periodos más tormentosos. Lo que no tenían tan claro era la respuesta de los líderes de Podemos y particularmente de Pablo Iglesias. Pero, a la vista de los resultados, no pueden estar más contentos. Los llamamientos desde Moncloa a

la unidad, a la estabilidad política y a la paz social son su mejor garantía.

### Previsiones muy sombrías para la economía

El momento de los grandes ajustes está cada vez más cerca. Más aún después de haber puesto todas las esperanzas en el tan celebrado acuerdo con Europa, un rescate encubierto que naturalmente exigirá su contrapartida: nuevos recortes y contrarreformas, empezando por las pensiones, nuevos topes salariales y despidos masivos, que tendrán menos indemnización, y un aumento de la precariedad y la explotación para hacer “más competitiva la economía”.

La recuperación en V que pronosticaba Nadia Calviño ha quedado refutada por los hechos: la OCDE informaba de una caída del PIB español del 18,5% en el segundo trimestre, uno de los mayores retrocesos de los 37 países que la conforman. Los meses de verano han dejado una foto sombría. En julio se constataba la hecatombe del sector turístico, con una caída del 73,4% en las pernoctaciones hoteleras respecto al año anterior. En el sector industrial —en plena reconversión, como se ha visto con Nissan o Alcoa— el retroceso fue del 14% en relación al mismo mes de 2019. Con la deuda pública batiendo un récord histórico —1,29 billones de euros, superando el 100% del PIB—, los capitalistas ya afilan los cuchillos para imponer nuevas medidas de “austeridad”.

A la clase dominante no se le escapa el potencial explosivo que se está acumulando. Manejar una crisis de esta profundidad no es tarea fácil para ellos. La tremenda polarización social, el giro a la izquierda y las grandes movilizaciones que impulsaron este Gobierno de coalición, junto a una pandemia que ha demostrado la incapacidad del sistema para garantizar lo mínimo a la mayoría de la población, son elementos que no ayudan a sus objetivos.

En este contexto, la burguesía recurre al pragmatismo. Su objetivo principal —garantizar sus beneficios millonarios— pasa por bajar la temperatura de la lucha de clases. Y en ese cometido, la colaboración de los dirigentes de la izquierda parlamentaria y de los sindicatos para mantener la paz social es la clave de bóveda de su estrategia. Apoyándose en la consigna de “unidad nacional” que Sánchez y los ministros de UP proclaman a los cuatro vientos, pretenden atar de pies y manos a los trabajadores ante los ataques de calado que preparan.

### Los “presupuestos de la unidad”... contra la clase trabajadora

La elaboración de los presupuestos es la siguiente gran tarea. Unos presupuestos que deben contentar además a la Unión Europea para que los fondos prometidos a los asistentes al acto de *España puede* —la oligarquía financiera y empresarial— se hagan efectivos.

A pesar de todo el esfuerzo de propaganda dedicado a explicar que la salida a esta crisis será completamente distinta a la de 2008, los hechos insisten en lo contrario. El famoso escudo social se ha mostrado completamente insuficiente e incapaz de dar solución a los problemas y la miseria que sufren hoy millones de familias trabajadoras. Mientras que la sanidad y la educación públicas se encuentran en una situación desastrosa y sin recursos para hacer frente al nuevo rebro-

te, mientras el Ingreso Mínimo Vital no ha llegado ni a un 1% de los solicitantes, las cosas están siendo completamente distintas para las grandes empresas.

No ha habido ninguna dificultad para regalar sin pestañear 100.000 millones de euros al sector financiero y empresarial, ni para que el erario público se hiciera cargo de los salarios y cotizaciones de los casi tres millones y medio de trabajadores afectados por los ERTE, exonerando a los empresarios. La patronal no obstante quiere más. Para que los ERTE no se conviertan en ERE, exige que el regalo de dinero público continúe más allá del 30 de septiembre y, por supuesto, nada de hablar de la derogación de la reforma laboral.

Todas estas exigencias están siendo aceptadas sin rechistar por el Gobierno. Es más, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, entrevistado en Onda Cero el 10 de septiembre, se mostraba firme partidario de penalizar las prejubilaciones, además de ampliar la edad de jubilación como ya ha defendido en otras ocasiones. Ese mismo día se conocían las intenciones del Gobierno de congelar el salario de los funcionarios en los próximos presupuestos generales. Son hechos. Hechos que además asfaltan el camino a la derecha.

El acercamiento de Sánchez a Ciudadanos y el mensaje que ha mandado al Partido Popular —arropado por los principales empresarios del país—, no deja lugar a dudas. El “diálogo” y la “unidad” que reclamaba estaban cargados de intencionalidad: aprobar unos presupuestos que contenten a Merkel, al Ibex, a la CEOE y a la derecha. Bajo el lenguaje de que todos somos soldados en esta guerra y de que tenemos que estar unidos para vencer al virus, se esconde la engañifa de siempre: pedir más sacrificios a la clase trabajadora y renunciar a los puntos del acuerdo de coalición con Unidas Podemos que podrían ser de más contenido, como la reforma de la fiscalidad,

## La verdad del acuerdo de la Unión Europea Un nuevo plan de rescate a costa de la clase obrera

► [www.izquierdarevolucionaria.net](http://www.izquierdarevolucionaria.net)



la derogación de las contrarreformas, el fin de los recortes...

Que Sánchez haya decidido negociar con Ciudadanos como socio prioritario para aprobar unos presupuestos de esta naturaleza no es una sorpresa. Que Cs se preste gustoso a esa tarea, tampoco. Incluso que Casado destituya a Cayetana Álvarez de Toledo —ofreciendo un guiño a los sectores de su partido y la burguesía que le exigen que arrime el hombro— también tiene su lógica. Al fin y al cabo, la “revolución cayetana” que instigaron en el Barrio de Salamanca mostró más peligros que ventajas: ese primer intento de derribar al Gobierno fracasó miserablemente, igual que ocurrirá con el patético anuncio de moción de censura presentado por Santiago Abascal.

La cuestión no es que la burguesía, la derecha, y la socialdemocracia hagan todo lo que esté en su mano para garantizar la estabilidad del capitalismo español y del régimen del 78. La cuestión es que Unidas Podemos se embarque en esta misión, amague con críticas retóricas para retroceder inmediatamente, e insista en comprometer su crédito político para dar cobertura a una operación estratégica que va contra sus intereses y contra los intereses de las clases populares.

Si Pablo Iglesias piensa que así demuestra su “realismo”, y que evitará el avance de la derecha, está muy equivocado: esta estrategia conduce no solo hacia nuevos desastres electorales, como ya se ha comprobado en Galiza y Euskadi, profundiza a una velocidad de vértigo la ruptura con su base social y las aspiraciones de transformación social de los millones de personas que con su acción en las calles permitieron la irrupción de Podemos.

**Unidas Podemos debe dar un giro de 180 grados.**

**¡Ni unidad nacional ni paz social!**

Pablo Iglesias afirmaba que la presencia de UP en el Gobierno era la garantía de empujar hacia la izquierda al PSOE. Sin embargo, el resultado ha sido justo el contrario: la formación morada ha sido arrastrada hacia la derecha y, asumiendo su papel de “hombres y mujeres de Estado”, se separa de la calle y de un programa de ruptura con la dictadura de los grandes capitalistas.

La velocidad de esta deriva ha sido asombrosa. Es cierto que la presión de su base social les ha empujado a hacer algunas declaraciones críticas con sus socios de Gobierno, como el escándalo de la huida de Juan Carlos I. Pero no se trata más que de críticas superficiales que nunca van acompañadas de hechos.

La rotunda oposición que manifestó la portavoz de Podemos, Isa Serra, a negociar los presupuestos con Cs, fue desmen-

tada en apenas 24 horas. Ahora se abren a negociar con la formación naranja por que Sánchez les ha ofrecido “debatir” una propuesta para presentar en nombre del Gobierno. ¿Pero qué esperpento es este? ¿O sea que la intención de Sánchez era pasar olímpicamente de su socio? Y, una vez que este acuerdo se produzca, y los dirigentes de UP acepten las rebajas presupuestarias que les pondrá Sánchez encima de la mesa, ¿cambiará algo que UP se siente con Arrimadas? ¿Es que ellos son tan buenos negociadores que la vencerán de la necesidad de confrontar con el Ibex y la CEOE para garantizar los derechos de la mayoría trabajadora?

Este es un ejemplo de adónde se llega con el cretinismo parlamentario en lugar de recurrir a la lucha de masas para defender un programa consecuente. Las renunciaciones de UP se han multiplicado exponencialmente desde el comienzo de la pandemia y el estallido de la crisis, justo cuando la necesidad de una alternativa de izquierdas se reivindica como una necesidad más urgente.

La aceptación de la lógica del mal menor y la justificación de que no hay margen para cambiar las cosas en función de la aritmética parlamentaria son un gravísimo error. La correlación de fuerzas, como sabe Pablo Iglesias, solo se puede modificar en el transcurso de la lucha. Pero ellos en lugar de impulsar la movilización, de romper con la paz social impuesta desde el aparato del PSOE y de los sindicatos, se pliegan a ella, la justifican y la teorizan. Cayendo en la política de la colaboración de clases contribuirán a que la mayoría de la población se enfrente a consecuencias muy amargas.

El PSOE se está comportando al frente del Ejecutivo como un defensor serio y muy hábil de los intereses de la burguesía. Naturalmente, la idea de que con un Gobierno de la derecha todo habría sido mucho peor está muy presente en la cabeza de la clase trabajadora. Esto les ha

dado un margen considerable. Pero no deja de ser un callejón sin salida. Sánchez ha utilizado a la formación morada para revestir sus medidas con un lenguaje “social”. Y el plan de la clase dominante es implicarles aún más en la agenda de la austeridad, hasta que no quede nada que se asemeje al partido que en su día prometió derrocar el régimen del 78. Quieren utilizarles para retrasar y debilitar la respuesta social de grandes dimensiones que inevitablemente llegará.

UP debe abandonar la política de los gestos, los tuits y la crítica literaria para impulsar un movimiento de respuesta a todos los ataques, basándose en la fuerza de la movilización y con un programa que defienda los intereses de las familias trabajadoras. Eso es incompatible con contentar al Ibex 35, a Cs o la trioka. Tienen que elegir: o con la clase trabajadora o con “la casta”.

**¡Sí hay alternativa!  
Luchar en las calles con un programa revolucionario para transformar la sociedad**

Es mil veces falso que no haya fuerzas para transformar esta realidad y ofrecer una alternativa a los recortes y la austeridad. Las movilizaciones de masas de las mujeres, del pueblo de Catalunya por la república, la huelga general en Euzkai Herria o el maravilloso movimiento de la juventud contra la represión, por la república, contra el cambio climático y por una educación pública así lo revelan.

Pero las cosas no se cambian en los despachos ni recitando la Constitución o defendiendo la legitimidad de un aparato del Estado plagado de franquistas, que no dudan en organizar campañas de criminalización y montajes contra todo lo que huele a izquierda —y de la que UP está siendo víctima ahora mismo—. La crisis de 2008 dejó valiosas lecciones sobre lo que no sirve: cuando se acepta la lógica del sistema se termina por justificar que no hay alternativa y se aplican las medidas más salvajes contra la clase trabajadora. Eso fue lo que hizo Tsipras en Grecia y las consecuencias de la de-

vastación social que provocó aún están a la orden del día.

Frente a una crisis económica de magnitudes extraordinarias, frente a la ofensiva feroz de la patronal, un Gobierno de izquierdas que realmente quisiera responder a las necesidades de la población nacionalizaría la banca y los monopolios. Defendería la enseñanza y sanidad públicas contratando cientos de miles de profesionales para reducir la ratio de las escuelas e institutos, reforzar los hospitales y los centros de atención primaria. Acabaría con el negocio de la sanidad privada y los centros de mayores, expropiándolos y colocándolos bajo el control inmediato del Estado, exactamente igual que el sector farmacéutico.

Un Gobierno de izquierdas digno de tal nombre, garantizaría por ley que todas las trabajadoras y trabajadores puedan acogerse a permisos retribuidos para asegurar la conciliación familiar. Se opondría a los despidos y a las reducciones salariales, y obligaría a la patronal a pagar los ERTE de los beneficios que han acumulado en los últimos años. Aprobaría inmediatamente un seguro de desempleo indefinido de 1.200 euros hasta encontrar un puesto de trabajo. Derogarías todas las contrarreformas laborales y de las pensiones, y pondría fin a los recortes. Permitiría la jubilación a los 60 años con el 100% del salario y contratos de relevo para la juventud. Anularía por ley todos los desahucios, crearía un parque público de vivienda con alquileres sociales asequibles, y expropiaría a los grandes tenedores y especuladores. Defendería las libertades y los derechos derogando la Ley Mordaza y depuraría de fascistas el aparato del Estado.

El camino que nos propone Sánchez, la unidad con nuestros explotadores, ya sabemos adónde nos lleva. Lo que requiere la situación es justo lo contrario: levantar una alternativa de lucha por la transformación socialista de la sociedad que enfrente a los responsables de esta catástrofe.

**¡Únete a Izquierda Revolucionaria!**

**¡Necesitamos políticas de izquierda de verdad!**



# Puigdemont rompe con el PDeCAT

## La crisis de la derecha catalana y la lucha por la república



**Esquerra  
Revolucionària**

La escisión entre el partido liderado por Carles Puigdemont y el PDeCAT ha provocado un terremoto político en Catalunya. Tras perder el control de Junts per Catalunya (JxCat), el PDeCAT recurrió a los tribunales para impedir su constitución como partido. Puigdemont y sus seguidores respondieron abandonando el PDeCAT. La crisis se ha trasladado al Govern, con el PDeCAT quedando fuera del mismo.

Conscientes de que Puigdemont es el único líder procedente del “espacio convergente” con apoyo de masas, una mayoría de diputados y cargos públicos del PDeCAT se ha unido ya a JxCat. Otro sector intenta mantener vivo el PDeCAT (al menos momentáneamente) como grupo de presión y negociación. Un tercero, liderado por Marta Pascal, fundaba en junio el Partido Nacionalista Catalán (PNC), presentándose como alternativa moderada al “independentismo unilateral” de Puigdemont, citando como referente al PNV y proponiendo una especie de *Convergència i Unió* (CiU) 2.0.

**CiU: el partido de la  
burguesía catalana, el 3%  
y el régimen del 78**

El colapso del PDeCAT, sumado al hecho de que todas las encuestas pronostiquen una debacle electoral a los partidos vistos por las masas como herederos directos de CiU, refleja la profundidad de la crisis revolucionaria abierta en Catalunya tras el 1-O. El giro a la izquierda de las masas, especialmente de las capas medias, ha hundido todos los intentos de la burguesía catalana de recomponer el instrumento político que ha representado *Convergència* durante décadas.

Si burgueses como Pujol, Mas, etc. pudieron presentarse como “defensores de Catalunya” ante sectores de las masas fue por la claudicación de los dirigentes del PSOE-PSC y PCE-PSUC, que renunciaron al derecho de autodeterminación y aceptaron el régimen monárquico y la “sagrada unidad de España”. A ello

se unió la supeditación de los dirigentes de ERC al nacionalismo burgués de CiU.

La influencia de CiU entre las capas medias permitió a la burguesía catalana separar a estas de la clase obrera y la juventud e impedir una verdadera lucha por la liberación nacional y social, contribuyendo a estabilizar el régimen del 78, imponiendo desde la Generalitat los recortes y ataques que necesitaban y sosteniendo en el parlamento español Gobiernos del PP y PSOE que acometieron ataques a los derechos democráticos y sociales cuyas consecuencias aún sufrimos hoy. A cambio, participó de las redes de corrupción que financian a los partidos del régimen del 78, organizando impunemente tramando como la del 3%.

**El giro a la izquierda de las masas  
hunde el “espacio convergente”**

La crisis de 2008-2009 provocó impresionantes luchas de masas en Catalunya: marea blanca, ocupación de los CAP, movilizaciones por la educación pública, 15M... El crecimiento electoral de En Comú Podem y ERC, y el desarrollo de la CUP, también expresaban el malestar masivo con los recortes capitalistas y la opresión nacional del régimen del 78. Ese malestar experimentó un salto cualitativo tras el referéndum del 1-O.

La lucha por llevar adelante el mandato del 1-O ha desvelado ante millones de personas que la república catalana por la que luchamos jóvenes y trabajadores, y amplios sectores de las capas medias, nada tiene que ver con las políticas reaccionarias y capitalistas de la derecha catalanista. La actuación represiva del Go-

vern durante el levantamiento contra la sentencia condenatoria a los presos políticos catalanes del Supremo o la gestión de la pandemia han incrementado más aún la indignación social. Catalunya tiene el mayor porcentaje de centros sanitarios y residencias de ancianos privatizados (75% y 91% respectivamente), algo que está costando miles de vidas. El Govern de Torra gobierna para sus amigos capitalistas, como muestra el regalo de 43.000 euros por cada paciente tratado en UCI dado de alta a las clínicas privadas cuando el coste, según la propia patronal de la sanidad privada, es muy inferior.

**¡Ninguna confianza  
en la derecha catalanista!  
Por la república catalana  
de los trabajadores y el pueblo**

El cuestionamiento al Govern ha abierto una lucha a cuchillo entre JxCat y ERC por la hegemonía en el independentismo. Con las elecciones catalanas en el horizonte, Puigdemont intenta deshacerse del lastre que representa el PDeCAT y capitalizar el descontento con los dirigentes de ERC por su política de pactos con el PSOE.

Reflejando la presión de las masas, Puigdemont fue más lejos de lo que el PDeCAT y la burguesía catalana consideraban razonable. Eso, y la brutal persecución política que sigue sufriendo por parte del régimen del 78, le dan un apoyo im-

portante entre sectores de las masas. Pero es un político burgués que carece de una alternativa consecuente para hacer realidad la república por la que luchamos jóvenes y trabajadores. Ha apoyado todos los recortes y privatizaciones del Govern y en la dirección de JxCat, que él impulsa, participan destacados representantes del empresariado catalán como Albert Batet o el nuevo conseller d'Indústria Ramon Tremosa; así como decenas de alcaldes, parlamentarios, consellers y cargos públicos convergentes que ven con pánico la movilización de las masas en la calle porque saben que amenaza a sus intereses.

El peso de la derecha catalanista en la dirección del proceso aleja a sectores decisivos de la clase obrera catalana de la lucha por la república e impide ganar el apoyo de los jóvenes y trabajadores del resto del Estado. Si esos dirigentes mantienen su influencia, pese al rechazo masivo que suscitan sus políticas, es únicamente por la ausencia de una política consecuente de los dirigentes de la izquierda.

Los dirigentes de Catalunya en Comú-En Comú Podem tuvieron una oportunidad histórica de liderar la lucha por la república catalana de los trabajadores y el pueblo, extender esa lucha a los trabajadores y jóvenes del resto del Estado y vincularla a la necesidad de derribar al régimen del 78 y construir una república federal socialista basada en la unión voluntaria de todos los territorios que así lo decidan. En lugar de ello, adoptaron una posición equidistante y han acabado aceptando, en la práctica, el régimen del 78 y la represión del derecho a decidir.

ERC ha recibido un apoyo masivo en las últimas convocatorias electorales para continuar la lucha por la república con políticas de izquierdas. Sin embargo, sus dirigentes están haciendo todo lo contrario: renunciar al mandato del 1-O, pactar con el PSOE y aplicar los mismos recortes y privatizaciones desde el Govern que JxCat. Por lo que respecta a la CUP, aunque su militancia participa en primera línea en la batalla por la república, sus dirigentes siguen renunciando a plantear una lucha independiente de la derecha catalanista y defender un programa y un plan de acción concretos, uniendo la lucha por la república y por el socialismo.

Este es el único programa que puede desbancar a la derecha y conquistar la república. La dirección del movimiento de liberación nacional debe estar en manos de los trabajadores y trabajadoras, basarse en la lucha en las calles y plantear una república catalana socialista que unifique al conjunto de los oprimidos y oprimidas para tumbar el régimen capitalista del 78. ¡Ni un paso atrás! ¡Únete a Esquerra Revolucionària para luchar por estas ideas!

Puedes leer el artículo completo  
en [izquierdarevolucionaria.net](http://izquierdarevolucionaria.net)



## Inmensos beneficios privados a costa del dinero público y del empleo



Antonio García Sinde  
Izquierda Revolucionaria  
Madrid

El reciente anuncio de su fusión con CaixaBank vuelve a traer a Bankia a las portadas de los medios de comunicación.

La crisis financiera de 2008 destapó el pozo negro en que se había convertido la Caja de Ahorros de Madrid, rebautizada después como Bankia. Operaciones especulativas de una magnitud desconocida hasta entonces, que causaron un agujero financiero que costó a las arcas públicas más de 24.000 millones de euros; dos presidentes de su consejo de administración encarcelados por corrupción —Rodrigo Rato, exministro de Economía del PP y exdirector del FMI, y Miguel Blesa, íntimo de Aznar, cuya muerte en 2017 fue declarada suicidio— y una estafa masiva a través de una emisión de preferentes que arruinó a decenas de miles de pequeños ahorradores.

Todo ello desnudó a unos dirigentes sindicales, de CCOO y UGT, corrompidos, que aceptaron todo tipo de sobornos, principalmente las célebres *tarjetas black*, y que, a cambio, facilitaron la destrucción de 4.500 empleos y un recorte salvaje de salarios. Todo un compendio de las prácticas que caracterizan al capitalismo español.

### ¿Qué pasó con el sistema bancario y en qué consistió su rescate?

En los años 90, los grandes capitalistas del Estado español, apoyándose en las reformas legales de Aznar, se lanzaron de cabeza al negocio inmobiliario. Fue la época de la famosa “burbuja inmobiliaria”, cuando se construían cada año muchas más casas de las que el mercado podía absorber y, a pesar del exceso de oferta, los precios de la vivienda alcanzaban cotas estratosféricas.

Los recursos necesarios para alimentar esa burbuja especulativa no procedían de los patrimonios personales de los grandes inversores, sino del crédito bancario, y cuando las capacidades crediticias de los bancos se agotaban recurrían a todo tipo de ingenierías financieras. Las cajas de ahorros, que canalizaban los depósitos de muchos millones de pequeños ahorradores, fueron vistas por los grandes financieros como un casi inagotable filón de recursos, y en ellas pusieron sus codiciosas manos.

De este modo, Caja Madrid no solo financió a precios de saldo proyectos inmobiliarios muchos de los cuales resultaron ruinosos, sino que se convirtió en un instrumento de sofisticadas operaciones bursátiles en grandes empresas como Iberia, Indra o Reiala (participada por FCC) que generaron inmensos beneficios a un puñado de capitalistas.

Pero la actividad especulativa organizada en torno a Caja Madrid no se limitó al ámbito del Estado español. A medida que la burbuja inmobiliaria interna daba síntomas de agotarse los gestores de Caja Madrid buscaron oportunidades de lucrarse de forma inmediata en los mercados internacionales.

La crisis de 2008 puso un fin abrupto a esta orgía de beneficios fáciles. Los grandes inversores plegaron velas, pusieron a buen recaudo sus ganancias y nos dejaron un coste directo de algo más

# Fusión CaixaBank-Bankia, la historia se repite



de 60.000 millones de euros, que hemos pagado la clase trabajadora con recortes, sacrificios e incremento de la pobreza.

Solo el rescate de Bankia en 2012 costó 22.424 millones en capitalización y más de 125.000 millones adicionales en diversas ayudas financieras, cuyo coste final aún no puede ser evaluado.

### La crisis capitalista alienta la concentración del sistema financiero

A pesar de lo impresionante de las cifras, los rescates de 2008 no solucionaron la crisis de fondo. Con el nuevo colapso de la economía mundial, desencadenado a raíz de la pandemia, nuevamente los inversores intentan proteger sus beneficios concentrando el capital y recortando sus costes laborales al precio que sea. La fusión de CaixaBank y Bankia se produce en este marco.

Ambas entidades comparten accionistas. Tres grandes gestoras norteamericanas de capital riesgo (BlackRock, Vanguard e Invesco) han tomado posiciones, y aunque su participación accionarial pueda parecer pequeña (el 6,87% en CaixaBank y el 3,81% en Bankia) su peso en la economía mundial es tan grande (gestionan unos activos equivalentes al PIB de toda la Unión Europea) que les asegura un poder de decisión desproporcionado.

Estos colosos de las finanzas quieren crear una entidad bancaria que por su volumen de activos (cerca de 665.000 millones de euros) será la primera del Estado español, en condiciones de saltar a la arena de las finanzas globales.

La perspectiva de actividad económica débil y de tipos de interés cercanos a cero o incluso negativos va a dificultar la mejora de los márgenes empresariales. Pero con la fusión será posible una drástica reducción de la red de oficinas y de plantillas.

Los 51.000 trabajadores afectados van a enfrentarse a un intento de destrucción masiva de sus empleos. Si el Banco Santander, con unos activos ligeramente inferiores a los que tendrá CaixaBank tras la fusión, cuenta con una plantilla de 27.000 trabajadores y sigue reduciendo empleo, la perspectiva para los trabajadores de Bankia y CaixaBank dista de ser optimista.

Por supuesto, en los cálculos de estos gigantes de las finanzas globales no hay lugar para pensar en devolver los 24.000 millones del rescate. Este dinero fue una aportación de capital que se convirtió en acciones y que en gran parte se consumió cuando Bankia realizó los ajustes contables necesarios para cubrir sus pérdidas, de modo que esas acciones hoy no valen ni 2.000 millones.

### Nacionalizar la banca bajo control de los trabajadores y sin compensación a los capitalistas

Frente a esta gigantesca operación especulativa, que amenaza con una nueva oleada de despidos en el sector, la reacción de los sindicatos ha sido absolutamente lamentable.

José María Martínez, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, en un artículo publicado en *Cinco Días*, se mostraba entusiasmado con la fusión. Los secretarios generales confederales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han sido algo más recatados, manifestando lacónicamente su “preocupación” por el empleo. En todo caso, su posición de partida es renunciar a emprender una lucha seria en defensa de todos los puestos de trabajo, y se limitarán a negociar la cuantía de las indemnizaciones.

Todo esto ocurre bajo un Gobierno que se reclama de izquierdas, y en el que participa de forma destacada UP. Uno de

sus dirigentes, Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, declaraba que “el Estado invirtió 24.000 millones en sanear Bankia y debe proteger a los contribuyentes, que rescataron con sus impuestos la entidad. Las ayudas públicas deben servir para atender necesidades económicas generales, y no para mejorar la rentabilidad de otras entidades”.

Sin duda son buenos deseos, pero el motor del sistema capitalista es la acumulación privada de beneficios, y no va a ser con buenos deseos ni con apelaciones a la justicia con lo que cambiaremos su funcionamiento ni derrotaremos al poderosísimo puñado de plutócratas que pretenden seguir lucrándose a costa del esfuerzo de la inmensa mayoría.

Unidas Podemos tiene la oportunidad de honrar los compromisos con su base social y aprovechar su posición en el Gobierno para explicar que sí se puede parar los pies al gran capital.

Ese medio es un programa que, al servicio del bienestar de la inmensa mayoría y basado en la movilización social, nacionalice, sin indemnización, el conjunto del sistema financiero, poniéndolo bajo el control obrero y cambiando el destino de los ingentes recursos que maneja, para que en vez de extender la precariedad y la pobreza y asegurar beneficios obscenos a un puñado de potentados, se utilicen para cubrir las necesidades sociales, garantizar los puestos de trabajo dignos y combatir eficazmente la pandemia.

Es la hora de poner sobre la mesa un programa socialista que convierta las aspiraciones de una vida mejor para la mayoría en una fuerza imparable de transformación social.

Puedes leer el artículo completo en [izquierdarevolucionaria.net](http://izquierdarevolucionaria.net)





Desahucio frenado en Santander el pasado mes de junio

# Por el derecho a un techo digno



**Carlos Naranjo**  
Esquerra Revolucionària  
País Valencià

Que nadie se confunda. Si alguien no había caído en la cuenta, que sepa que el principal problema de la vivienda no es otro que... los vagos y violentos “okupas”. Este ha sido el soniquete con el que nos han bombardeado programas de televisión y radio a lo largo de todo el verano, y que de paso ha servido para publicitar a conocidas empresas de seguridad y blanquear a otras, de dudosa legalidad, que se dedican efectuar expulsiones de viviendas de forma violenta.

## ¿Qué esconde la burda campaña contra la “okupación”?

Una campaña nada desinteresada —jaleada demagógicamente por la derecha política y mediática— que busca echar una cortina de humo sobre el drama que sufrimos millones de jóvenes y familias trabajadoras ante la falta de vivienda pública asequible, los abusos en el precio de alquileres e hipotecas o los desahucios. A la vez, se pretende ocultar a los verdaderos “usurpadores” del derecho a un techo digno: la banca, fondos de inversión... los grandes tenedores de vivienda.

Pero sobre todo, se trata de generar un falso alarmismo social que facilite la criminalización de todos los que luchamos y nos organizamos por conseguir esos derechos.

Tampoco es casualidad que esto ocurra ahora. Las consecuencias de la crisis económica y su durísimo impacto social auguran despidos, recortes y austeridad que ensancharán más la brecha de desigualdad existente. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalaba en mayo que alrededor del 30% de los trabajadores en ERTE terminarán despedidos, y el Banco de España prevé que la tasa de paro se dispare al 23,6% este año. La oleada de desahucios que se produjo en la anterior crisis —entre 2012 y finales de 2019 se ejecutaron más de un millón— puede quedar pequeña.

Vayamos a lo concreto. No hay datos oficiales de viviendas ocupadas. Las cifras proporcionadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil hablan por sí solas: en 2019 se registraron 14.621 denuncias por ocupación ilegal de vivienda, de las cuales solo el 27,5% iniciaron un trámite judicial. Respecto a los algo más de 25,7 millones de inmuebles residenciales existentes, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, esas denuncias afectarían al 0,056% de las viviendas y las que prosperan en los juzgados, a un más ridículo 0,016%.

## La banca y los grandes capitales son los verdaderos “usurpadores”

La manipulación informativa no solo es tremenda, sino de un cinismo y una doble moral insultante. En 2019, según el Consejo General del Poder Judicial, se ejecutaron 54.006 desahucios (la mayoría por impago de alquiler). Son 150 al día, es decir, cuatro veces más que las denuncias diarias por ocupación. Ni estas cifras, ni la violencia con que se desahucia a familias enteras merecen los mismos titulares ni minutos de los medios de comunicación.

Y aquí llegamos a un aspecto clave: quiénes son los propietarios de la inmensa mayoría de pisos ocupados. Según el último censo del INE, en 2011 había 3,5 millones de viviendas vacías, la gran mayoría en manos de las grandes entidades financieras. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), hay alrededor de 100.000 familias ocupando y “no llegarían a 1.000 las viviendas de particulares ocupadas”, el resto son viviendas en desuso, propiedad de bancos y fondos buitres.

Si atendemos a los datos de 2018, de las 4.717 viviendas ocupadas en la Comunidad de Madrid (CAM) el 70% eran propiedad de entidades bancarias, el 10% de grandes propietarios y solo el 5% de particulares. De los 2,9 millones de viviendas de la CAM, el 0,14% están ocupadas y el 0,02% son de particulares.

Sin embargo, en esta campaña de intoxicación se iguala muy conscientemente el “allanamiento de morada”, entrar a vivir en un piso habitado, con la “usurpación”, hacerlo cuando está deshabitada y en desuso. La realidad es que no existe un problema de primeras o segundas viviendas ocupadas, los allanamientos son anecdóticos por más que quieran hacerlos pasar por regla general.

También se tergiversa el perfil del okupa: jóvenes violentos relacionados con la ultrazquierda o inmigrantes vinculados con el tráfico de drogas. Una nueva mentira. La situación de emergencia habitacional es una cruel realidad que afecta al grueso de la clase trabajadora, que sufre la precariedad, el desempleo y una demoleadora devaluación salarial en la última década.

## Basta de hacer negocio con el derecho a la vivienda

La burbuja especulativa en los alquileres ha aumentado de forma desorbitada los precios, brindando ingentes beneficios a los especuladores. Según información de Fotocasa, el precio del arrendamiento ha subido un 52% en los últimos cinco años. Valencia, Catalunya y Madrid se llevan la palma, con un incremento del 68%, 60% y 57% respectivamente.

Fondos buitres como Blackstone, que disfrutaban de enormes exenciones y ventajas fiscales, se hacen de oro. Incluso, hemos visto la escandalosa actuación de administraciones públicas vendiendo pisos de protección oficial a estos fondos sin que lo supieran los inquilinos, que luego han visto aumentos de renta del 100% o más. Mientras, la inexistencia de un parque de vivienda social en alquiler es clamorosa: representa un 2% del total y contrasta con el 30% de los Países Bajos, o el 17% en Francia o Reino Unido.

No es de extrañar que el perfil de quienes ocupan viviendas, como señala la PAH, corresponda a “las familias vulnerables” en “un 90%” de los casos.

## Por un plan que garantice vivienda digna y asequible a las familias trabajadoras

Ante tal emergencia, el Gobierno PSOE-UP aprobó un decreto completamente insuficiente que, en la práctica, solo ha protegido los enormes beneficios de los grandes tenedores de vivienda. No es una salida ofrecer moratorias o créditos —para endeudar a los más pobres y garantizar el negocio a la banca— cuando has sido despedido. De la misma manera, la paralización de desahucios quedó muy limitada a familias muy vulnerables y solo durante seis meses.

Si realmente se quiere defender a los más desfavorecidos e implantar un verdadero escudo social, este Gobierno tendría que haber suspendido el pago de los alquileres e hipotecas a todos los inquilinos que no pueden hacerle frente. Y, apoyándose en los movimientos sociales, sindicatos de inquilinos, la PAH y en la movilización de la juventud y la clase trabajadora, llevar adelante la expropiación sin indemnización de los bancos (rescatados con 60.000 millones de las arcas públicas), fondos buitres y empresas especuladoras que poseen centenares de miles de viviendas vacías.

Además, tendría que nacionalizar las grandes constructoras y empresas inmobiliarias y crear una gran empresa pública de la construcción que atienda a criterios de calidad y respeto del medio ambiente.

De esta manera se podría poner en marcha un plan de vivienda pública de calidad en régimen de alquiler al servicio de las necesidades sociales, con precios asequibles —no más del 10% del salario— para luchar contra la especulación. Así se acabaría con los desahucios, con las deudas que ahogan a miles de hogares hipotecados y se pondría fin a la pesadilla de tantas familias sin alternativa habitacional o que no les queda otra, pese a la estigmatización y los riesgos, que recurrir a la ocupación.

Los jóvenes y trabajadores que hemos perdido el empleo, que vivimos la precariedad y vemos recortados nuestros ingresos sin poder hacer frente al pago de una vivienda digna debemos organizarnos y defender estas reivindicaciones. Esta es la única manera de enfrentar el atropello de los capitalistas, su criminalización y su miserable moral.



# El trágico fiasco del Ingreso Mínimo Vital



**Bárbara Areal**  
Izquierda Revolucionaria  
Comisión Ejecutiva

El 29 de mayo se aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), calificado por el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz como “el mayor avance en derechos sociales desde la Ley de Dependencia” y “un hito en la historia de España”. Teóricamente, la ayuda llegaría rápidamente a 850.000 hogares —2.300.000 personas— rescatando al 3% de la población que se encuentra en pobreza severa.

Pocos meses después, al igual que con la anunciada derogación de la reforma laboral y otras medidas del escudo social, la realidad desmiente la propaganda. El 18 de agosto la UGT, sindicato nada sospechoso de posiciones antigubernamentales, informaba que de las casi 715.000 solicitudes presentadas solo se habían resuelto 32.629 y, de estas últimas, más de 28.000 habían sido denegadas. A finales del verano, solo el 0,58% de solicitantes cobrarían el IMV.

## ¿Es complicado acabar con la miseria?

Si respondemos desde un punto de vista técnico y nos abstraemos de la naturaleza del capitalismo, no lo es en absoluto. ONGs y movimientos sociales, que cuentan con reputados economistas e intelectuales progresistas de relieve, proponen soluciones aparentemente razonables además de baratas. Incluso parecen fáciles, ya que no implican un cuestionamiento del sistema, tan solo una distribución menos egoísta de la riqueza contando con el concurso del Estado: que los ricos sean un poco menos ricos para que haya menos pobres.

Por ejemplo, Oxfam calcula que con 6.000 millones de euros (una décima parte

de lo que costó rescatar a los bancos), se podría acabar en el Estado español con la pobreza severa, pasando del 9,18% de la población a un 0,67%.<sup>1</sup> Por su parte, Lluís Torrens, Daniel Raventós y Jordi Arcarons, integrantes de la Red Renta Básica, argumentan en un estudio muy documentado que si “tasásemos con un 1% la riqueza del 10% más rico de la población, que a la vez se incluye entre el 10% de las rentas más altas, se podrían recaudar 10.000 millones de euros, aproximadamente un tercio de lo que costaría financiar la renta básica. Introduciendo impuestos ambientales (...) se recaudarían entre 6.000 y 10.000 millones de euros adicionales”.

Torrens se aproxima a una de las claves de este asunto afirmando que “una renta básica universal individual implicaría una transferencia de ricos a pobres equivalente a un 3% del PIB (...) Por lo tanto, sí que se puede financiar. Lo que hay que tener es la valentía política de subir los impuestos”.<sup>2</sup>

Pero no se trata tanto de la valentía individual de un ministro o ministra, como de una política de clase que entienda que el capitalismo es un sistema socioeconómico basado en unas relaciones de propiedad determinadas, y que los capitalistas no existen para hacer filantropía con los pobres sino para aumentar exponencialmente sus beneficios. En la época del imperialismo, el Estado solo es un instrumento que trabaja por el fortalecimiento del capital monopolista. Todo análisis que no parta de esta realidad, fracasará en sus propuestas.

El Estado no es neutral ni gestor de los intereses del conjunto de la sociedad, como la justicia no es igual para todos, ni existe una moral universal. No es necesario empezar desde cero ignorando lo que la teoría del socialismo científico y la práctica del marxismo revolucionario han aportado para entender el funcionamiento del capitalismo y cómo podemos conquistar la auténtica justicia social. Engels ya explicó el papel de los utópicos del siglo XVIII, convencidos de que

“la injusticia, el privilegio y la opresión iban a ser expulsados por la verdad eterna, la justicia eterna, la igualdad fundada en la naturaleza y los inalienables derechos del hombre”.

Sin embargo, hay un abismo entre aquellos grandes pensadores que “no podían rebasar los límites que le había puesto su propia época”<sup>3</sup> y los utopistas del siglo XXI que, teniendo en cuenta la decadencia capitalista y la experiencia histórica acumulada por la lucha de clases, finalmente no son más que otros reformadores del sistema, pero esta vez con un sesgo reaccionario pues alientan la falsa idea de que es posible un capitalismo más “decente”, más “ético”.

## Su fiscalidad, su justicia, su Estado... su sistema

Cuando se hicieron públicos los datos que probaban el fiasco del IMV, rápidamente el ministro Escrivá achacó los retrasos a la tarea de impedir los “fraudes” y las “duplicidades”. ¡Qué repugnante esconder el incumplimiento de tus promesas recurriendo al argumento de que en nuestra clase hay mucho listo/a que quiere vivir del cuento!

Claro que hay un fraude gigantesco, pero el dedo acusador del Gobierno no debería dirigirse hacia los desempleados, las madres solteras, los pobres o nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. La denuncia debe dirigirse en el mismo sentido que hace el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que exige un cambio radical en su actividad, ya que mientras un 80% de los técnicos se dedica a perseguir a particulares, autónomos o pymes, solo un 20% investiga a las multinacionales, grupos empresariales y grandes fortunas, a pesar de ser los responsables del gigantesco fraude fiscal que todos los Gobiernos consienten. Según los datos que maneja Gestha, los ricachones españoles tienen 180.000 millones de euros depositados a buen recaudo en paraísos

fiscales, entre ellos el que hasta hace muy poco era cabeza visible de la Jefatura del Estado, Juan Carlos I.

Mientras los datos del fracaso del IMV saltaban a la palestra a mediados de agosto, el curso político se inició con un cónclave público de Pedro Sánchez junto a los más poderosos banqueros/as y empresarios/as. Allí quedó consagrada, con el beneplácito de Pablo Iglesias y el aplauso entusiasta de la oligarquía, la política de “unidad nacional”. Lo que no se dijo en esa reunión es que, según la última estadística del impuesto de patrimonio, entre 2011 y 2018 el número de potentados aumentó un 36%, a la par que el de pobres pasaba de 7,59 millones de personas a 8,31.<sup>4</sup>

Las alternativas que apelan al “sentido común” para mejorar el funcionamiento del capitalismo han mostrado su impotencia. Ese discurso, al que tanto recurren los ministros del PSOE y de Unidas Podemos pensando que pueden atraer al “campo progresista” a los empresarios que tengan “sentido de Estado”, es muy viejo. ¿Quién se beneficia de ello? La respuesta cae por su propio peso.

En contraste con esta propaganda del pacto social y la sumisión, las reivindicaciones obreras y la movilización de masas para imponerlas siempre han dado frutos. Todos los derechos que hoy nos arrebatan fueron conquistados por quienes nos precedieron a través de la organización, las huelgas, las ocupaciones de fábricas, las manifestaciones, las insurrecciones y las revoluciones.

El trágico fiasco del Ingreso Mínimo Vital es una seria advertencia. Ningún escudo social podrá tapar los agujeros de esta política fallida y condenada por la historia. Urge por tanto un cambio radical de política y de estrategia. Hay que ponerse manos a la obra.

1. www.oxfamintermon.org (bit.ly/2GLaSRu).
2. Datos y declaraciones recogidos en www.re-drentabasic.org (bit.ly/3h9Ng5n).
3. F. Engels, *Del socialismo utópico al socialismo científico*. Fundación Federico Engels, pp 52, 53 y 78.
4. www.publico.es (bit.ly/3h8IZze).

Puedes leer el artículo completo en [izquierdarevolucionaria.net](http://izquierdarevolucionaria.net)



## Victoria de las trabajadoras de limpieza del Gregorio Marañón

Entrevista

Entrevistamos a María Villafuentes y a Elvira Díaz, trabajadoras del Hospital Gregorio Marañón, que han encabezado el movimiento contra la privatización del servicio de limpieza del hospital por parte de la Comunidad de Madrid (CAM). Gracias a su lucha han conseguido paralizar definitivamente la licitación, que ha sido anulada completamente por los tribunales.

# “La anulación de la privatización es fruto de nuestra lucha”

**EL MILITANTE.-** ¿Cómo habéis vivido la pandemia? ¿A qué os habéis tenido que enfrentar como trabajadoras de la limpieza de un hospital público?

**María Villafuentes.-** Hubo caos y mucha desinformación. Lo primero que nos dijeron fue que no lleváramos mascarillas delante de los pacientes para no alarmarles, para posteriormente decir que era obligatorio. También dijeron que eran obligatorios trajes EPI en contacto con enfermos de covid-19, pero esos trajes nunca llegaron a las trabajadoras de limpieza porque somos las grandes olvidadas. Nos tuvimos que buscar la vida y hacer frente a todo esto con trajes hechos con bolsas de basura. Nadie puede imaginar lo que se ha vivido en el hospital.

**Elvira Díaz.-** Yo trabajo con el equipo de urgencias. Hemos tenido momentos de ver a las enfermeras e incluso a los médicos llorar, a la auxiliares, y acobardarnos, porque teníamos que limpiar una cama para que entrara otro enfermo de covid y ver cómo el de al lado se nos estaba muriendo. Problemas todos los días para que nos dieran EPI, para que nos dieran mascarillas, para no infectar, porque nuestro mayor miedo era llegar a casa e infectar a tu familia. Acercarnos a preguntar a salud laboral, y decimos que mientras no tuviéramos síntomas que no podían hacernos las pruebas a todas porque entonces se quedaban sin personal.

**EM.-** ¿Cómo conocisteis la privatización y cómo reaccionasteis?

**MV.-** A principios de junio empecé a oírse por el hospital que el gerente había firmado ya con la CAM la privatización. Inmediatamente vamos a los sindicatos a que nos den una explicación. Nos dicen que ellos no saben nada. No contentas con esa respuesta, empezamos a movilizarnos. Sabemos lo que conlleva en un hospital privatizar una limpieza. De hecho, en este hospital ha estado privatizada durante catorce años: menos personal, duplicar los servicios, empeorar la limpieza generando más infecciones.



**ED.-** Los sindicatos han denunciado ante la justicia y gracias a la movilización hemos conseguido pararla de forma definitiva. Nosotras dijimos a los sindicatos que aunque se había parado cautelarmente había que continuar, y creemos que eso ha sido decisivo para que finalmente se haya anulado. Con los rebrotes nos han mandado personal que no es de la bolsa pública de empleo, sino de empresas privadas. Y tenemos a casi todos de baja porque no tienen formación, no saben ponerse un traje EPI.

**EM.-** ¿Cómo os habéis organizado?

**MV.-** En principio hicimos concentraciones y protestas de quince minutos en el turno de mañana y de tarde. De ahí se pasó a hacer una concentración en la Asamblea de Madrid para unir a todos los turnos, y mucha gente vino a apoyarnos: las compañeras del hospital de El Escorial, el Sindicato de Estudiantes, periódicos y medios de información digitales... Posteriormente, durante una o dos semanas realizamos paros de 14:30 a 15:30. Los dirigentes de los sindicatos nos dijeron que dejáramos el verano tranquilo porque la gente estaba cansada, pe-

ro no íbamos a parar y empezamos a hacer concentraciones cada quince días en la entrada de urgencias con muy buena aceptación y con el apoyo de celadores, enfermería, etc. Muchísima gente en la calle nos aplaudía. Ahora teníamos preparada una asamblea para el 9 de septiembre para informar de cómo continuar y pedir a los sindicatos que dieran un paso al frente. Para el miércoles 16 de septiembre mantendremos la entrega de firmas pidiendo la dimisión del gerente del hospital, ya que con la anulación de la licitación se ha demostrado que actuó mal.

**ED.-** Seguimos porque hemos tenido mucha gente, como vosotros, que nos apoya. No hay derecho a que se nos machaque, a que nos intenten quitar nuestros puestos de trabajo, después de todo lo que hemos peleado y pasado con el covid. Queremos que se nos escuche y mantener nuestros puestos de trabajo, y lo hemos conseguido gracias a la lucha. Es muy fácil estar sentado en una mesa y mandar desde allí, pero hay que estar en pleno meollo. Quiero decirle al señor gerente que si no ha sabido proteger ni sabe proteger a su personal, que piense bien qué clase de persona es cuando tu personal lo ha dado todo por el hospital que tú diriges y ahora los quieres dejar en la calle.

**EM.-** Habéis conseguido una gran victoria con la paralización definitiva de la privatización, ¿cómo valoráis la situación?

**MV.-** Ha sido una noticia muy buena para todas y todos los trabajadores que hemos dado la batalla contra la privatización. Ha sido una buena inyección de autoestima y de que la lucha obrera puede llegar a tener frutos. CCOO interpuso un recurso, pero ha sido esencial la movilización que hemos llevado desde principios de junio y la presión que hemos hecho durante julio y agosto. Gracias a

ello hemos hecho llegar nuestra situación, con nuestra presión, con las concentraciones en urgencias, recogidas de firmas, asambleas de trabajadoras... A día de hoy, y en vísperas de una asamblea que tenemos mañana, los ánimos están muy bien, con confianza para seguir adelante con futuras acciones que pueda intentar hacer la CAM. Ha sido la mejor noticia que podíamos recibir, y es que los frutos de nuestra lucha se han visto reflejados ahí, en esta anulación de la privatización de nuestro servicio.

**EM.-** Vuestra lucha también es para defender la sanidad pública...

**MV.-** La defensa de la sanidad pública es algo que debemos hacer todas y todos. Nosotras defendemos la sanidad pública y que nuestro servicio de limpieza sea 100% público. Queremos hacer un llamamiento a toda la oposición en la Asamblea de Madrid para que apoyen activamente nuestra lucha, para conseguir que esta señora, Díaz Ayuso, y su equipo se vayan. Para que dejen de machacar a la sanidad pública y por supuesto a nosotras, que solamente somos limpiadoras, que cumplimos con nuestro trabajo antes, durante y después de la pandemia.

**ED.-** En todos los hospitales donde el servicio es privado hay falta de todo tipo de personal, machacan a la gente a trabajar. Yo he trabajado antes en lo privado y se cómo te tratan, que no puedes contar con tus días libres porque lo primero que te dicen es que has firmado un servicio de 24 horas, y que ellos pueden tirar de ti cuando quieran. Si nos quitan la sanidad pública, nos quitan lo más importante. Me gustaría preguntar a la señora Ayuso qué ha hecho con el dinero que les han dado para reforzar a la sanidad. Aquí se montó un hospital de campaña y al final no se usó, fue dinero tirado, y lo que se usó fue el Hotel Colón, de uno de sus amigos.

en [www.sindicalistasdeizquierda.net](http://www.sindicalistasdeizquierda.net)

**Nissan • Balance del acuerdo desde el sindicalismo combativo y de clase**





**Antonio Muñoz**  
Delegado CGT en Elmec  
Navantia San Fernando  
Cádiz

A finales de agosto los trabajadores de la industria auxiliar de Navantia en Puerto Real, seguidos por los de San Fernando, se pusieron en pie de guerra ante la falta de carga de trabajo y la perspectiva de despidos masivos en el astillero de Puerto Real, contra la precariedad laboral y contra los reiterados incumplimientos del convenio del metal.

La respuesta de Navantia y de los empresarios de la industria auxiliar fue el despido fulminante de Manuel Balber y Jesús Galván —miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) y trabajadores de la compañía Nervión en Puerto Real— como represalia y aviso a navegantes. Esta misma empresa actuó de la misma manera en Ferrol en 2006, despidiendo a toda la plantilla como represalia por su combatividad.

Lo que había comenzado como movilizaciones para exigir carga de trabajo, se transformó en un paro indefinido de 5 días exigiendo la readmisión de los despedidos, el fin de las listas negras y la represión. Durante cada uno de esos días, los trabajadores se reunieron regularmente en asamblea a primera hora de la mañana frente a los tornos en Puerto Real y San Fernando, debatiendo y votando mantener el paro indefinido y las protestas.

Ante la actitud decidida de los trabajadores, tanto Navantia como la patronal del metal desataron una furiosa campaña de criminalización, amenazando con sanciones, despidos masivos e impulsando un cierre patronal.

### Los comités de empresa de Navantia alientan el discurso de la patronal

Desgraciadamente, los comités de empresa de Navantia, en vez de posicionarse junto a los trabajadores, han actuado en la práctica como portavoces de la patronal, criminalizando la lucha. En declaraciones a *Onda Cádiz*, la presidenta del comité por CCOO, Marga Forné, llegó a asegurar que las movilizaciones no pueden “perjudicar a la carga de trabajo, espantar a los clientes, ni buscar un perjuicio para la industria de la zona, argumentando tu derecho al trabajo en un contrato vencido” con “actuaciones totalmente salvajes en una apuesta teatralizada”.

Unas palabras en línea con la patronal del metal de Cádiz (FEMCA) que en una nota de prensa sostenía esos mismos argumentos: “La situación es insostenible y las empresas han acordado la suspensión del contrato de las plantillas (...) no entendemos que se pida carga de trabajo usando argumentos y acciones que lo que hacen es ahuyentar a los clientes”.

Durante esa semana de paros, la patronal envió una circular a todas sus empresas asociadas planteando “no remunerar ninguno de los días no trabajados”, recordando “que las tres faltas al puesto de trabajo es causa de despido disciplinario”, y animando “a los trabajadores a que se presente denuncia ante las fuerzas de seguridad del estado... y que trasladen a sus sindicatos la manera en que se les está impidiendo trabajar”.

La circular terminaba amenazando con el cierre patronal a la espera del resultado de la asamblea convocada el 24 de agosto, señalando que “el comité de



# Balance de la lucha en los astilleros de la Bahía de Cádiz

## Un ejemplo de combatividad y dignidad obrera

Navantia, CCOO... están al corriente y de acuerdo con esta votación”. Una circular que ha puesto en evidencia lo lejos que han llegado los propios comités de empresa de Navantia alentando el discurso del miedo de la patronal.

Sometidos a esta enorme presión, las asambleas presenciales a las puertas del astillero en Puerto Real y San Fernando votaron por la vuelta al trabajo, manteniendo el calendario de movilizaciones, incluida la huelga general del metal el 27 de agosto. Una huelga finalmente aplazada al 4 de septiembre, que tuvo un seguimiento limitado, y en la que se intentó unificar la lucha de los astilleros y de la industria aeronáutica, ante el anuncio de despidos masivos en uno de los principales proveedores de Airbus, Alestis.

En este contexto, y a pesar de las enormes dificultades existentes —el miedo a la pandemia, al paro y a las sombrías perspectivas económicas, la represión y las amenazas—, los trabajadores de astilleros de la Bahía de Cádiz y del metal pusieron durante cinco días contra las cuerdas a Navantia y a la patronal del metal, demostrando que sí existen condiciones para enfrentar la ofensiva de la patronal.

Los dirigentes sindicales de CCOO y UGT, que en tantas ocasiones se justifican alegando la pasividad de la clase obrera, han demostrado en esta lucha que el problema no es la disposición a la lucha por parte de los trabajadores, sino su propio papel negándose a impulsar y apoyar activamente una lucha justa y enfrentando el chantaje patronal.

**Para garantizar el empleo, ¡hay que acabar con la subcontratación!**

La crítica situación en los astilleros, y ahora también en el sector aeronáutico, no se ha resuelto y se agravará durante los próximos meses. Y los primeros que enfrentan las consecuencias de la crisis son las decenas de miles de trabajadores subcontratados. Una nueva demostración de que es necesario atacar la raíz del problema.

Navantia, una empresa pública, garantiza millones de euros de dinero público a la patronal mientras condena a la mayoría de los trabajadores a la precariedad, la inseguridad y en algunos casos la muerte. Solamente con los ingentes beneficios que hacen todas las empresas subcontratadas, a costa del dinero de todos, podrían garantizarse condiciones dignas de trabajo, más empleo y proyectos industriales sólidos y constantes en el tiempo.

Por eso mismo es hora de levantar una consigna clara, la única que puede revertir la penosa situación que padecemos miles de trabajadores de las auxiliares en la Bahía de Cádiz, Ferrol o Cartagena: el fin de la subcontratación y la incorporación de las plantillas a la principal, a Navantia, con las mismas condiciones y derechos. ¡Hacemos el mismo trabajo! ¡Todos somos Navantia!

### El futuro industrial pasa por una Navantia 100% pública

En el actual contexto de crisis económica, y ante la amenaza de una nueva reconversión industrial, tal y como estamos viendo ya con Nissan, es más necesario que nunca defender cada puesto de trabajo, oponerse a cada cierre, rechazar cualquier nueva medida que profundice aún más nuestra precariedad. La única razón para que esto sea así es que los capitalistas, los empresarios, solo se preocupan por sus beneficios, y si no tienen, destruyen el tejido industrial sin ningún

reparo, aunque eso suponga una catástrofe social para regiones enteras.

Hay numerosas necesidades sociales que cubrir, y empresas industriales como Nissan o como Navantia deben estar ahí para hacerlo. Así lo hemos visto durante esta grave crisis sanitaria, por ejemplo con la fabricación de respiradores. ¿No se señala constantemente por parte de los dirigentes sindicales de CCOO y UGT que necesitamos defender la industria? ¿No se ha señalado esto mismo desde el Gobierno, y desde Unidas Podemos? ¿No hay que tener una alternativa a un modelo turístico barato que condena al Estado español al paro masivo y a la miseria cuando ha estallado una crisis como la actual? Y si es así, ¿cómo podemos seguir permitiendo despidos en el metal y en astilleros, cierres de empresas como Nissan, etc.?

El Gobierno, y especialmente Unidas Podemos, deben cambiar el rumbo de industrias públicas como Navantia o Airbus. Hay que acabar con una lógica que hace de estas industrias una ingente fuente de negocios para grandes multinacionales a costa de cientos de millones de euros de dinero público. La lucha contra la precariedad y la subcontratación ha sido una de las banderas de Unidas Podemos. Ahora tienen la posibilidad de demostrar, en la práctica, apoyándose en la lucha de los trabajadores, que es posible acabar con estas dos lacras, los bajos salarios, y las condiciones laborales de esclavitud y miseria. ¡Sí se puede!

en [www.izquierdarevolucionaria.net](http://www.izquierdarevolucionaria.net)

**El sector aeronáutico bajo ataque  
¡Unificar las luchas y defender  
los puestos de trabajo!**



# Por una alternativa de clase que acabe con la esclavitud sexual



**Laura Calderón**  
Libres y Combativas/  
Izquierda Revolucionaria  
Madrid

El impacto de la pandemia ha vuelto a exponer de manera descarnada el único rostro posible de la explotación sexual. Sin importar sus vidas, su estado físico, mucho menos el emocional, solo la cantidad de billetes que puedan entrar en los bolsillos de los dueños de los clubes de “alterne”, miles de mujeres son deshumanizadas y sometidas a una violencia salvaje en la infinita lista de burdeles que pueblan ostentadamente la geografía del Estado español. ¿Acaso un virus iba a suponer el más mínimo problema para que proxenetas y puteros siguieran extorsionando a las mujeres empujadas vender sus cuerpos en un burdel o en la calle?

## ¿El problema con los prostíbulos es la covid-19?

Ante este panorama, el 21 de agosto la ministra de Igualdad, Irene Montero, reclamaba a las Comunidades Autónomas el cierre de los prostíbulos por ser uno de los principales focos de contagio. Es extraordinariamente grave que el Gobierno de coalición, autodenominado como el “más feminista de la historia”, y en par-

ticular el Ministerio de Igualdad, encabezado por Unidas Podemos, pretenda encarar esta realidad como un problema más de salud pública, y no como lo que verdaderamente es: un negocio multimillonario basado en el rapto y la trata de personas, la supresión de derechos y la violación sistémica contra las mujeres más oprimidas de la clase trabajadora. Una lacra social que hay que abolir.

Se presentaba esta propuesta como un paso adelante en la lucha contra la explotación sexual. Nada más lejos de la realidad. Irene Montero se ha limitado a “recomendar” a las CCAA el cierre de los prostíbulos y locales de alterne, ya que los contagios que se produzcan pueden conllevar un “aumento potencial de positivos de difícil rastreo”. El resultado ya lo hemos visto: muchos Gobiernos autonómicos, especialmente en los territorios donde la prostitución está estrechamente vinculada al turismo, han mantenido su actividad sin mayor problema y ante la pasividad del Gobierno central.

En ningún momento se cuestiona ni se pretende dismantlar este lucrativo negocio, que opera con la connivencia e impunidad absoluta del aparato del Estado y del resto de instituciones del sistema.

Lo máximo que se propone la ministra Irene Montero es una clausura “temporal” de los burdeles, y que cuando pase la pandemia —o simplemente haya

una ligera mejora— todo siga igual. Pero lo más sangrante es la ausencia absoluta de un mínimo plan para sacar a las mujeres prostituidas de las condiciones de miseria y dependencia económica por las que son encerradas en los burdeles o empujadas a la calle para poder sobrevivir. Sin los recursos necesarios que permitan una alternativa a la prostitución, ¿en qué condiciones se les deja con el cierre de los burdeles?

Eso sí, este abandono institucional contrasta con la situación de la mafia proxeneta que, reconocida como gremio empresarial propio desde 2001 por beneplácito del Tribunal Supremo, tendrá derecho incluso a solicitar ERTE al Gobierno. ¡Un absoluto escándalo!

## Más violencia e indefensión para las mujeres prostituidas

Según un informe de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), aunque durante el estado de alarma se cerraron clubes de carretera y burdeles, el 80% de la prostitución de estos locales se redirigió a pisos y casas particulares ([apramp.org/apramp-ante-el-coronavirus-covid-19](http://apramp.org/apramp-ante-el-coronavirus-covid-19)). Como indica APRAMP, las prácticas más vejatorias y peligrosas, que muchas mujeres prostituidas en completa indefensión se ven obligadas a aceptar, se han incrementado.

Los “empresarios del alterne” han exprimido aún más esta terrible vulnerabilidad. Al ser la mayoría inmigrantes, condenadas a la “irregularidad” por la Ley de extranjería, sin acceso al sistema público de salud, sin una red familiar o de apoyo y sin más residencia que la habitación que alquilan a los clubes, las deudas con sus explotadores se han disparado.

Por otro lado, el paso de clubes a pisos no ha supuesto ningún obstáculo para que los proxenetas sortearan los efectos del confinamiento e incrementaran sus negocios y la explotación de los cuerpos de las mujeres. La prostitución digital y el tráfico de pornografía han crecido desde marzo un 30% en el Estado español, y los registros de visitas a webs con contenido pornográfico desde el inicio del confinamiento superaron la suma total de visualización de Netflix, Amazon y Twitter juntas ([www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52385436](http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52385436)).

A pesar de que todo esto es más que conocido, durante estos meses tanto el silencio como la inacción del Ministerio de Igualdad y el Gobierno han sido atronadores.

No solo eso. En un primer momento el Gobierno anunció que tanto las víctimas de trata, como al resto de mujeres en “contexto de prostitución” serían grupos preferentes a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital. Pero una vez aprobado en el BOE, “las mujeres en contexto de prostitución” quedaron fuera de la redacción ante el silencio absoluto del Ministerio de Igualdad.

En su lugar se delegó en una administración sin recursos el identi-

car y decidir qué es trata y qué no. Es decir, mujeres que sufren una situación brutal de extorsión económica y abuso, que necesitan de una atención integral y de recursos tanto materiales como psicológicos para salir de su situación, tendrán que exponerse a un trámite largo que ni tan siquiera es capaz de garantizar la confidencialidad. ¿Cómo van a sentirse protegidas las mujeres que están hostigadas por el acoso de su proxeneta, que viven en la pobreza con cargas familiares y estigmatizadas socialmente, o bajo la amenaza de ser expulsadas del país, si en vez de recibir una alternativa inminente son cuestionadas en un examen público?

O es que al Ministerio de Igualdad se le olvida que la mayor fuerza de coacción con la que los explotadores de la prostitución operan es la falta de recursos económicos y la completa ausencia de derechos de estas mujeres. Cerrar los prostíbulos mientras no se combaten radicalmente las condiciones que empujan a las mujeres a la pobreza, precariedad y al desempleo, solo contribuye a mantener intactas las raíces sobre las que la prostitución se fortalece.

## ¡Abolir la prostitución y defender a las víctimas!

Si el Ministerio de Igualdad y el Gobierno quieren defender a las mujeres que sufren a diario la explotación sexual tienen que dar un giro completo. Empezando por el cierre no temporal, sino total y definitivo de los prostíbulos, y continuando con la incautación de la fortuna personal y patrimonio de los proxenetas, traficantes de personas y beneficiarios de la explotación sexual para invertirlos en garantizar los derechos sociales y económicos de sus víctimas y familias.

¿Cómo? Garantizando un subsidio de desempleo indefinido hasta encontrar un trabajo digno, sin demora ni trabas institucionales; expropiando las casas vacías en manos de la banca para ofrecer una vivienda pública asequible y digna con los suministros básicos de agua, luz y calefacción; garantizando una protección social, sanitaria y educativa a sus hijos e hijas que evite la violencia contra ellos, y devolver la custodia de los hijos a las mujeres que por situación de prostitución se les ha arrebatado este derecho.

El Gobierno de coalición tiene que asegurar la regularización y el derecho a la ciudadanía para todas las prostitutas extranjeras víctimas de la trata, así como garantizar con medios públicos el derecho de reagrupación familiar en el extranjero, y poner fin a las deportaciones. Y, por supuesto, derogar todas las leyes y normativas represivas municipales y estatales que criminalizan a las mujeres en situación de prostitución.

Evidentemente un programa así supone confrontar decididamente con los grandes empresarios, el poder financiero, la jerarquía eclesiástica y los sectores franquistas y reaccionarios del aparato del Estado. Millones de nosotras en todo el mundo nos hemos levantado y estamos dispuestas a llegar hasta el final para acabar con este sistema y su violencia económica y social.



# Nueva publicación de la Fundación Federico Engels

La publicación de *Los marxistas y los sindicatos* inicia una nueva colección de la Fundación Federico Engels, *Escritos de León Trotsky*. Un proyecto que pondrá a disposición de los lectores cientos de artículos del revolucionario ruso compilados temáticamente, muchos de ellos inéditos en castellano o que vieron la luz en ediciones ya desaparecidas. La edición de este primer volumen coincide además con la conmemoración del 80º aniversario de su asesinato, al que hemos dedicado un amplio espacio en nuestra web.

La obra teórica y práctica de Trotsky sigue inspirando a los revolucionarios del mundo. Partiendo de las ideas originales de Marx y Engels, actuó como un restaurador de su teoría —igual que Lenin o Rosa Luxemburgo—, expurgándola de las tergiversaciones y distorsiones del reformismo. Elogiado como escritor de talento, la calidad de su prosa siempre estuvo al servicio de la emancipación de la clase obrera.

León Trotsky fue, junto con Lenin, el dirigente más importante de la Revolución de Octubre de 1917. Al frente del Ejército Rojo defendió el Estado obrero del asalto imperialista y la contrarrevolución de los generales zaristas, y jugó un papel de primer orden en la fundación y organización de la Internacional Comunista.

Más tarde, bajo los golpes de la degeneración burocrática de la revolución, se convirtió en el objetivo principal de Stalin y la nueva casta de arribistas. Tanto él como sus camaradas, que habían conformado la vanguardia del partido durante el periodo leninista, sufrieron una persecución implacable que acabó para la mayoría de ellos ante un pelotón de fusilamiento. En la farsa de los procesos judiciales de Moscú (1936-1938), Trotsky se convirtió en el principal acusado. A pesar de sufrir el exterminio de sus compañeros de ideas y la muerte o el asesinato de sus hijos e hijas a manos del terror estalinista —entre ellos León Sedov, su más estrecho colaborador político—, Trotsky nunca capituló.

Expulsado a Turquía en 1929, finalmente recaló en México asilado por el régimen de Lázaro Cárdenas. Con la determinación y confianza que siempre mostró en las empresas más complejas y difíciles, se enfrentó a la tarea trascendental de su vida, mayor incluso que la realizada en 1917: la explicación marxista del fenómeno del estalinismo. En esta labor teórica y militante impulsó la Oposición de Izquierda en 1923 y la creación de la Cuarta Internacional en 1938, un legado clave para la lucha por el socialismo.

Sus escritos sobre sindicalismo recogidos en este volumen, contestan muchas de las inquietudes y preguntas sobre los sindicatos que los trabajadores y activistas de vanguardia se plantean hoy. Como Trotsky señala en uno de sus artículos:

“El capitalismo solo puede mantenerse rebajando el nivel de vida de la clase obrera. En estas condiciones los sindicatos pueden o bien transformarse en organizaciones revolucionarias o bien convertirse en auxiliares del capital en la creciente explotación de los obreros.

“La burocracia sindical, que resolvió satisfactoriamente su propio problema social, tomó el segundo camino. Volcó toda la autoridad acumulada por los sindicatos en contra de la revolución socialista e, incluso, en contra de cualquier intento de los obreros de resistir los ataques del capital y de la reacción.

“En estas condiciones cabe preguntarse si no es posible pasar por encima de los sindicatos, si no es posible sustituirlos por otro tipo de organizaciones, como por ejemplo los sindicatos revolucionarios, los comités de empresa, los sóviets u otros organismos de esta clase. Los partidarios de esta opción cometen el error fundamental de confundir estas experiencias organizativas con la solución del gran problema político, a saber: ¿cómo liberar a las masas de la influencia de la burocracia

sindical? No basta con ofrecer a las masas otro lugar adonde dirigirse. Hay que ir a buscarlas donde están y guiarlas.

“Precisamente en la época actual, en que la burocracia reformista se ha transformado en la policía económica del capital, el trabajo revolucionario en los sindicatos puede obtener —relativamente

en poco tiempo— resultados decisivos, si se realiza con inteligencia y de forma sistemática”.

Cuando el capitalismo atraviesa una de sus mayores crisis y la lucha por el socialismo cobra nueva relevancia y urgencia, los escritos de Trotsky son un arma cargada de futuro.



**Los marxistas y los sindicatos**  
Escritos León Trotsky • Volumen I  
288 páginas | PVP 15 euros

## ¡Hazte colaborador de la Fundación Federico Engels!

**30%**  
menos para todos los colaboradores



Toda la información en [www.fundacionfedericoengels.net](http://www.fundacionfedericoengels.net)

El sueño utópico de un capitalismo de rostro humano se ha convertido en una cruel pesadilla. Necesitamos levantar una alternativa socialista consecuente frente a la ofensiva contra el empleo, los salarios y los derechos democráticos. El capitalismo no es el mejor de los mundos posibles, sino un mundo a derribar si queremos conquistar para la humanidad una vida que merezca la pena.

La publicación de los textos de Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky y muchos más, junto con las aportaciones de teóricos marxistas contemporáneos, es un aspecto clave y uno de los ejes de la actividad de la Fundación Federico Engels. En la actualidad contamos con más de 150 títulos en catálogo en castellano, catalán y euskera. Por solo 30 euros de apoyo al año podrás obtener todos nuestros libros con un 30% de descuento y contribuir así a la tarea de recuperación y difusión de las ideas del marxismo revolucionario.

# Entrevista a Coral Latorre

Secretaria general del Sindicato de Estudiantes

“Necesitamos un plan de inversión para rescatar la enseñanza pública, no palabras vacías”



El curso escolar 2020-2021 se inicia en medio de un repunte masivo de la COVID-19 y con una indignación creciente entre la comunidad educativa por la actitud pasiva del Ministerio de Educación de cara a la vuelta a las aulas. El Sindicato de Estudiantes ya ha anunciado la convocatoria de una huelga general de estudiantes los días 16, 17 y 18 de septiembre en defensa de una educación pública, presencial y de calidad y exigen un plan de rescate a la escuela pública para garantizar unas aulas seguras. Entrevistamos a Coral Latorre, la secretaria general de la organización estudiantil y afiliada a Izquierda Revolucionaria.

**El Militante.- ¿Cómo valoráis la gestión del Ministerio de Educación durante estos últimos meses y cuáles son los motivos de la huelga?**

**Coral Latorre.-** La política educativa del Ministerio de Educación ha fracasado por completo. La desidia mostrada por la ministra Isabel Celaá y su negativa a poner en marcha un plan unificado para invertir recursos masivos para rescatar a la educación pública es escandalosa. El Gobierno ha tenido meses y meses para preparar una vuelta a las aulas en condiciones dignas pero no ha hecho nada. Y no lo ha hecho porque no quieren aumentar los presupuestos para la educación pública. Hay que ser claros. El camino por el que ha optado Educación se basa en el continuismo con la política de recortes y privatizaciones, y solo alimenta la brecha social y de clase que durante la pandemia no ha dejado de crecer, empeorando las condiciones laborales de nuestros profesores y sembrando un fracaso escolar mayor entre los estudiantes de familias trabajadoras.

Por si esto fuera poco, Celaá ha decidido mirar hacia otro la-

do y pasar la pelota a las CCAA, lavándose las manos sobre un asunto que es de su máxima competencia. Es precisamente esta actitud pasiva y la ineficacia mostrada por el Gobierno la que está envalentonando la ofensiva de la derecha, que allí donde gobierna está aprovechando esta situación para seguir regalando dinero público a sus amigos de la concertada y privada. Las políticas de Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid son una clara muestra de ello. La misma fórmula aplicada en la sanidad pública y las residencias de mayores la estamos viviendo en la educación pública.

La huelga que hemos convocado está totalmente justificada porque la situación de emergencia social que vive la enseñanza pública no puede esperar más y porque no nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestro derecho a la educación pública y nuestra salud están en peligro. El Gobierno debe rectificar de inmediato y debe escuchar el clamor y las reivindicaciones de la comunidad educativa.

**EM.- ¿Cuáles son esas reivindicaciones? ¿Qué medidas consideraréis que garantizarían una vuelta a las aulas segura y digna?**

**CL.-** Todas nuestras reivindicaciones van en una misma línea y es que se resuelvan de una vez por todas las grandes carencias que sufre la educación pública en un momento crítico. Basta ya de gestos y palabras vacías. Exigimos al Gobierno PSOE-UP que ponga en marcha un plan de rescate a la enseñanza pública que pase por la inversión del 7% del PIB para la escuela pública. Que aprueben una partida extraordinaria de 100.000 millones de euros para garantizar todas las medidas necesarias para que nuestros centros sean espacios seguros. Es inadmisible que un Gobierno que se dice de izquierdas regale semejante cantidad de dinero a las grandes empresas y bancos del Ibex-35 y mientras la educación pública se desangra no hagan nada para detener la hemorragia.

PASA A LA PÁGINA 7 ▶

